

Documentos de TESIS

El 39º Congreso del PS, realizado en 1987, aprobó 10 tesis referidas a la construcción del partido y su inserción en un proyecto de país alternativo al neoliberalismo.

En dichas tesis se establecía que en el país se diseñaban dos bloques: un bloque conservador que impulsaba y se beneficiaba del proyecto neoliberal y un bloque popular alternativo a construir que podía asumir un proyecto de signo progresista para el desarrollo nacional y que expresaba el interés de las grandes mayorías nacionales.

Catorce años han transcurrido desde entonces y la vida confirmó lo medular de aquel cuerpo de tesis. Al mismo tiempo, las mismas deben ser actualizadas, no porque los acontecimientos pasados las hayan superado, sino porque el presente que esas tesis en cierta forma prefiguraron, ya está planteando nuevos desafíos, que a su vez exigen nuevas respuestas. La elaboración de estas nuevas tesis indica que el PS avanza, tiene vocación de mayoría, está comprometido con el país.

Profundos cambios pautaron la vida del país y del mundo en estos 14 años. Fracaso y caída estrepitosa de los países del llamado socialismo real, profundización de la revolución científico-tecnológica y de la globalización, ofensiva ideológica del neoliberalismo y desarticulación consiguiente de las sociedades a nivel mundial.

Y a nivel del país, se han sucedido varios gobiernos de las derechas los cuales han profundizado la reestructuración de signo neoliberal de nuestra sociedad. Se ha continuado con las privatizaciones y desregulaciones, parcialmente frenadas con el plebiscito de 1992. La desindustrialización, la desocupación, el crecimiento de la pobreza, la fragmentación social deja atrás a la sociedad integradora que supimos ser.

El modelo de acumulación internacional y de signo neoliberal y las políticas seguidas en materia comercial, monetaria y cambiaria, llevaron a una profunda crisis económica que persiste y golpea como siempre a los sectores populares pero afecta también seriamente a sectores del empresariado industrial y agrario.

El país ingresó en el proceso del MERCOSUR y fue más sensible a las vicisitudes de sus vecinos. La izquierda accedió al gobierno de Montevideo, se mantuvo en él, vivió desprendimientos en 1989, se recuperó largamente al punto de ser hoy la primera fuerza electoral con el EPFA, encara su proceso de actualización y encontró en Tabaré Vázquez una potente figura de atracción ciudadana y de clara conducción, con el acceso al gobierno nacional como un dato que está en el horizonte.

El PS, en su proceso de renovación ideológica, se ha consolidado y ha crecido y es hoy la primera fuerza de la izquierda, tiene una presencia importante en todo el territorio nacional y mantiene sus características de partido organizado y militante.

Interpretar e integrar este conjunto de cambios en una perspectiva que nos permita avanzar hacia el gobierno nacional en 2004 y desde el gobierno comenzar un proceso de transformaciones a partir de 2005, implica una actitud abierta, antidogmática y de búsqueda de nuevas claves en la realidad

Los socialistas ni nos aferramos a lo conocido, ni nos negamos a nosotros mismos.

Tenemos experiencia, pero también tenemos esperanza.

Por eso no concebimos estas nuevas tesis como un conjunto de verdades inmutables, sino como una herramienta abierta de diálogo democrático entre los socialistas y la

sociedad uruguaya para la construcción de un país de libertad, justicia y progreso.

Porque esa es, al fin y al cabo, nuestra razón de ser.

Tesis 1: Sociedad, estado y mercado

Para estos adalides del proyecto neoliberal no hay improvisaciones; defienden la "libertad" en pugna con la "igualdad". Aquella es concebida estrictamente en el plano económico. La última no es sino sólo una creación utópica. La naturaleza - o mejor "Dios"- "nos ha hecho iguales". El Estado opera como un factor "coercitivo" para los agentes económicos. Regula, ampara a los débiles, a los ineficientes, frena la libre competencia. Además aplica impuestos. Además se realimenta a sí mismo. Pone trabas burocráticas que lo justifiquen.

El mercado -concebido como el espacio "ideal" donde concurren los agentes económicos con sus mercaderías- en última instancia es el que mejor regula la economía, el que premia a los eficientes y castiga a los ineficientes, en él no hay tutores; los que ofrezcan mejor calidad y menor precio (o mejor, una combinación perfecta de ambos) serán los que triunfen y con ellos la sociedad toda. Por ello sostienen que "el mercado es quien asigna mejor los recursos".

En la concepción liberal, el Estado debe limitar sus funciones a la de juez y gendarme. Esto es a mantener el "orden" que siempre será un orden capitalista. Un "orden" que preserve y defienda la propiedad privada de los revolucionarios y los ladrones, no se entrometa en los "negocios" de los privados y, en todo caso, dirima sus diferencias en los tribunales de justicia. Un Estado que esté dotado de la fuerza para meter en la cárcel a los delincuentes, cuidar que no se escapen y hacer cumplir las sentencias de sus jueces.

En la postura extremista, los liberales no creen incluso que el Estado deba ocuparse siquiera de temas tales como la educación y la salud pública. La aplicación salvaje de este modelo en el siglo XIX generó una rebelión de los explotados que expresaron su rechazo en forma espontánea e inorgánica primero y luego, en forma organizada. El desarrollo del capitalismo, su expansión imperial en todo el planeta, sus crisis y contradicciones internas, las guerras en que disputan el dominio de los mercados desató y hicieron crecer - también a escala del planeta - las críticas al sistema.

La presión de quienes proponían alternativas al modelo, el surgimiento de formaciones sociales, producto de la Revolución Rusa en 1917, y las crisis internas - en especial la gran depresión de 1929 - hicieron revisar la versión liberal ortodoxa. El Estado, rechazado antes fue utilizado como instrumento para resolver las crisis mediante la inversión pública, la protección arancelaria, los subsidios y el crédito estatal. El capital público reanimó la reproducción ampliada del capital, pero la apropiación continuó siendo privada.

No obstante, a raíz de un nuevo contexto internacional en la segunda postguerra mundial, el Estado no sólo interviene en el mercado para dinamizar la economía, también lo hace para regularla y utilizar una parte del excedente económico para resolver temas como la salud, la educación, la seguridad social. En suma, el Estado redistribuye el ingreso, regula las relaciones laborales, al menos amortigua las diferencias sociales. Se llamó este modelo "Estado benefactor".

El Estado benefactor no sólo mitigó las tensiones sociales, contribuyó asimismo a un desarrollo sostenido de la economía. En los hechos, durante casi tres décadas este modelo funcionó en Europa Occidental.

Los "altos costos" de la carga social fueron duramente criticados por la derecha "ultra". La Sociedad Mont Pelerin, fundada por Hayek en la inmediata postguerra y

difundida dogmáticamente desde Chicago por Friedman. Efectivamente, un nuevo contexto mundial -en especial la crisis del petróleo - y en concurrencia la pérdida de rentabilidad, más una despiadada política internacional en materia financiera, marcaron las economías europeas. EE.UU. con Reagan e Inglaterra con la señora Thatcher, impulsaron la doble demonización: 1) la del "imperio del mal" representado por la URSS y sus países satélites, cuyas economías burocratizadas y centralizadas no funcionaban y eran incapaces de sostener una competencia estratégica a nivel armamentístico. La implementación del sistema de defensa llamado "guerra de las galaxias" marcó un hito fundamental en esta batalla que, finalmente, ganó EE.UU. con la implosión de la URSS; 2) La del Estado benefactor, comenzando por Inglaterra. Privatizaciones salvajes, desregulaciones económicas y laborales. Recortes y privatización de la Seguridad Social. Cuidadosamente programada, lo que se ha dado en llamar "una ideología económica" del mundo a aplicar "fuesen cuales fuesen las condiciones y las culturas del lugar", tiene como componentes: estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, desregulación y privatizaciones a ultranza, libertad absoluta de movimientos de capitales, competitividad descargada de la "ganga" social, etc.

Universalizada, y aplicada duramente a través de los organismos internacionales bajo su control en todo el mundo, esta doctrina de nueva ("neo") no tienen absolutamente nada; ha concentrado hasta límites no concebibles hace treinta años la riqueza y extendido por todo el planeta la pobreza, generando una inestabilidad permanente en las economías de los países dependientes -ahora llamados "economías emergentes" y sembrando incertidumbres políticas y desastres sociales de los que no están a salvo los propios países centrales, que abierta o silenciosamente la han impulsado.

Los doctrinos recalcan, en cada oportunidad, que frente a la globalización de la economía, y el dominio absoluto que en el campo económico y militar tienen los Estados Unidos y sus aliados centrales, el "margen de maniobra" de los gobiernos ha desaparecido, y hasta ellos mismos podrían ser innecesarios. Criterio que obviamente no aplican en sus propios dominios. Nos mandan a hacer lo que ellos no hacen. Esto es válido para las tasas de interés, los aranceles, las patentes, la intervención abierta del Estado para financiar la reactivación económica (véase ahora mismo los 70.000 millones de dólares inyectados a la economía por G. Bush raíz de la crisis de los atentados terroristas del 11 de setiembre).

En nuestro país el "modelo" tiene casi treinta años de aplicación progresiva y su implantación a mansalva ha encontrado dificultades políticas (Referéndum del 13/12/1992). Pero lo que se ha realizado en Uruguay y en el Conosur de A. Latina ha traído descalabros gigantescos.

La apertura indiscriminada de las economías, las privatizaciones, desmonopolizaciones estatales, desregulaciones laborales, desmontaje de la Seguridad Social, eliminación de controles estatales, etc. no sólo no han traído incremento de la riqueza, mejor competencia, modernización del aparato productivo, más y mejor calidad de vida para la gente. Han traído si niveles de desocupación históricos -16/17 %-, pobreza y marginalización de extensos sectores de la población, destrucción del aparato productivo, disminución abrupta del consumo, desequilibrio fiscal y constante peligro de caer en mora para pagar la deuda, que crece y crece y crece...

Como se ve, un mundo cada vez más interdependiente, más inseguro y con mayor pobreza. Wolfhesson, Presidente del Banco Mundial quien no solo teorizó la doctrina, sino que durante años ha sido fiel práctico de las mismas, hoy se alarma con un mundo de 2.800 millones de seres humanos que viven con menos de dos dólares por día, 1.500 millones que no tienen acceso al agua potable y 2.000 millones que carecen de energía eléctrica.

El modelo neoliberal ha traído de la mano, junto a las desregulaciones, las privatizaciones, las concesiones a privados, la restricción del gasto social, un

fenómeno que no es ajeno al capitalismo, pero que se ha convertido en una epidemia de fin de siglo, que no se detiene en los primeros tramos del nuevo milenio: la corrupción que enlaza al sector privado con el público. Como una plaga irrumpe en Japón, Indonesia, Malasia, Corea, Brasil, Méjico, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, etc.,etc.

Un absoluto desprecio por los valores democráticos, el manejo incontrolable de los dineros públicos, ha permitido el remate de la propiedad pública a precios viles; la coima ha pululado y el destino de fondos que presumiblemente iban destinados a pagos de la deuda, se han disipado. Los monopolios públicos son hoy monopolios privados. El endeudamiento se ha multiplicado en diez años por tres. El capital transnacional ha conquistado mercados cautivos (Energía, Puertos, Aeropuertos, Aerolíneas, Telecomunicaciones, Gas, Combustibles, Petróleo, etc.)

El Proyecto Progresista

Los socialistas, desde la década de 1950, no sólo hicimos la crítica del capitalismo - ya sea del centro imperial como al capitalismo dependiente-, sino que abordamos con rigor, la crítica del modelo soviético en su versión estalinista. La centralización total de las decisiones económicas, la planificación burocrática y antidemocrática no solo de los proyectos de desarrollo sino también de las políticas sociales, la ausencia casi total de protagonismo y participación social fue vista por la izquierda no comunista como una traba al desarrollo de las fuerzas productivas. Al mismo tiempo el "modelo" soviético- cuasi un capitalismo de Estado- convertía a la jerarquía del Estado y del Partido en verdaderos usufructuarios del excedente económico producido, dado que se apropiaban en forma abierta de una parte sustancial de la riqueza social.

En rigor la planificación centralizada hasta la exasperación, de forma autoritaria, no democrática, no examinaba las correctas demandas de la gente -el mercado-, no daba lugar a la perfección creativa en lo científico y tecnológico, distribuía con criterio de favor político, desalentaba el involucramiento de la ciudadanía en el destino del proyecto.

Un Estado omnipresente en todas las actividades, cumplía pesada y erróneamente con metas muchas veces innecesarias, duplicaba o triplicaba esfuerzos, restaba calidad a la producción lo que es tanto o más importante sometía a dominación y explotación a la gente en aras de una supuesta "sociedad socialista". En esencia, la supresión de la democracia social, la real ausencia de libertades políticas, ahogadas siempre en aras de la seguridad ante el enemigo capitalista, la gestión total a cargo de un Estado elefantiásico e incompetente, terminó por hacer implosionar al modelo.

Un proyecto progresista no solo debe efectuar la crítica rigurosa del modelo neoliberal, debe, afirmándose en objetivos de justicia social, no renunciar a que un Estado democráticamente gestionado cumpla un papel protagónico en la conducción económica, coordine a los agentes económicos, determine opciones globales luego de procesos de análisis participativos, y vigile y regule el mercado. El objetivo de los socialistas es construir una sociedad sin clases. Esta meta se alcanzará al cabo de un proceso histórico que no estamos en condiciones de determinar ahora. Hemos afirmado, sin embargo que no sólo no hay que renunciar a él, sino que hay que avanzar con construcción permanente, en cada coyuntura precisa.

Tener presente el mercado, tiene un punto de partida: no hay mercado sin consumidores. Un proyecto progresista debe no sólo ofrecer igualdad de oportunidades sino también de resultados. La distribución correcta del ingreso debe realizarse a través de políticas tributarias justas -gravando más al que más tiene-, pero también mediante remuneraciones salariales acordes a las necesidades básicas que debe satisfacer un ser humano en el mundo moderno. El Estado debe definir las mismas e impedir que a través del domino del mercado en forma monopólica no solo se explote al ciudadano sino que se trabe el desarrollo económico sostenido mediante la concentración de la riqueza.

El Estado, gestionando democráticamente, debe permitir a los agentes económicos expresarse, compartir la planeación de los presupuestos, pero no es neutral ni debe serlo si pretende corregir las desigualdades sociales.

En este plano, conviene tener presente que si las fuerzas progresistas ganan el gobierno por el voto de la gente, tienen la obligación de cumplir su programa y estar dispuestas a usar la legitimidad del poder para utilizarlo en beneficio de los más. No se nos escapa que la clase y las capas sociales que han concentrado la riqueza van a tratar de obstaculizar la realización del proyecto. Más la obligación de un gobierno progresista, que ha llegado al poder con el voto mayoritario del pueblo es operar de modo tal de aislar a la reacción, concentrar detrás de sí a la mayoría de la población afectada por el modelo neoliberal, y no perdiendo de vista que un proyecto es tanto más sólido en su realización cuanto más masas tenga como soporte. Y la línea maestra para lograr esto es primero resolver las necesidades de los más postergados.

Los más postergados en nuestros países son las masas de desocupados, marginados, subempleados. El Estado en nuestros países debe generar los recursos para reactivar la economía, planificando cuidadosamente la inversión pública, utilizando austeramente los dineros públicos. La promoción del empleo obliga a la acción protagónica del crédito público, el apuntalamiento de las actividades productivas que resulten más propicias a generar empleo y rentabilidad.

En este sentido el papel de las empresas estratégicas del Estado es vital. Ellas no sólo pueden proporcionar los recursos necesarios para otros emprendimientos. Son de importancia primordial para proporcionar insumos básicos -energía, combustibles, agua, infraestructura- para proporcionar costos adecuados a un plan de desarrollo sostenido.

En el capítulo del salario social, el rol de un Estado democrático es también fundamental. Él debe contribuir con políticas generales y también focalizadas a combatir la pobreza, atender al 48% de los niños que viven bajo el nivel de la pobreza en forma primordial, pero ocupar en lo inmediato un rol de decisiva importancia en materia de salud y educación.

No habrá crecimiento ni desarrollo si no se resuelven correctamente los temas de la salud pública y de la educación pública. Es preciso resolver que ningún uruguayo podrá carecer de asistencia, y que todos tienen, en relación a sus ingresos, obligación de contribuir a su sostenimiento. En lo que dice relación con la educación pública, los socialistas sostenemos que el Estado debe garantizar a todos el acceso a la misma, asegurando niveles igualitarios y de alta calidad. Y atender en forma gratuita y laica la formación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los recursos públicos sostendrán la enseñanza pública. Si existen interesados privados en alentar educaciones para sectores que no quieran servirse de la educación pública, el estado no debe impedirlo, pero los costos deberán ser asumidos por quienes quieran utilizar esos servicios y asegurando un conjunto de programas básicos comunes a impartir.

Un gobierno progresista debe alentar las formas sociales de producción, y a través de la educación y la investigación científica y técnica, propiciar su desarrollo. Un tema central para cambiar el país, modernizar su producción y elevar los patrones culturales tan golpeados por el desempleo y la marginación, es destinar recursos públicos cuantiosos al desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En este campo las políticas públicas hacia la Universidad deben cambiar radicalmente. Ésta debe ser tratada como un aliado de primera línea para el cambio, recordando siempre que es allí donde se sintetiza y se crea una parte central del conocimiento, y que éste es, en el siglo XXI, uno de los principales factores de desarrollo.

Entre los desafíos que debe crear la propuesta progresista, uno central lo constituye responder al despoblamiento y el desarraigo del medio rural, con su consecuencia de

destrucción del aparato productivo agropecuario, sector básico de la economía de nuestro país. Hacia esto deben dirigirse políticas sistemáticas, coherentes, interrelacionadas, que den cuenta de dos dimensiones: políticas dirigidas al fortalecimiento y fomento de las unidades productivas y acciones globales y racionales del uso del territorio, a nivel nacional y local. Debe ponerse el centro no solo en la producción sino en el arraigo del productor rural y su familia; hay que rescatar la experiencia y el saber que es transmitido en gran parte de generación tras generación. Estas políticas deberán estar conectadas con aquellas que hacen al fortalecimiento de los complejos agroindustriales.

Un proyecto progresista, en un mundo dominado hasta el presente por los grandes espacios económicos del capitalismo transnacional, sólo puede tener futuro si es capaz de articularse a escala regional y continental. Es política de los socialistas desarrollar y ampliar el MERCOSUR y como gran espacio económico y social, pactar acuerdos con otros espacios económicos.

Tesis 2: El Uruguay como proyecto y como proceso

En los últimos 15 años se han consolidado, en la sociedad uruguaya, un conjunto de cambios sociales y económicos profundos y dramáticos. Al mantener total vigencia la Tesis central de 1987, en el sentido de que se conforman dos bloques enfrentados (uno conservador en el poder y otro popular y alternativo) se hace totalmente imprescindible tratar de entender cuánto y cómo ha cambiado la composición de los mismos y su relación.

Comprender estos cambios, ordenarlos en cuanto a importancia y profundidad es una tarea central para definir las políticas y estrategias de mediano y largo plazo.

Es claro que en la consolidación de estos cambios hay causas externas que tienen que ver con la recomposición global del capitalismo, que impacta con toda su fuerza en un país dependiente como el nuestro. Pero hay que tener presente que esta incidencia de factores exógenos ha sido amplificada por las políticas neoliberales, que especialmente en la década del 90 fueron implementadas.

Vale la pena tener presente que lo que llamaremos el ajuste estructural, que afectó la base económica y las relaciones sociales en nuestro país, consistió en la aplicación de recetas de alcance mundial y regional.

Los cambios en la economía La década del ajuste estructural

En respuesta a la crisis de los años ochenta en América Latina se lanza, a finales de la década, una ofensiva para imponer una serie de reformas estructurales en los países dependientes, bautizadas a principios de los noventa como "Consenso de Washington". A partir de los organismos multilaterales financieros (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, especialmente) dominados por los países centrales, se generaron un conjunto de políticas de ajuste estructural y estabilización destinadas a suplantar el modelo de desarrollo industrial y fortalecimiento del mercado interno (en nuestra región impulsado, principalmente, por la CEPAL) por otro netamente económico liberal, centrado en el mercado y la apertura externa. Se buscó así reinsertar a los países dependientes en la nueva etapa de transnacionalización y globalización del capitalismo.

Las mismas consistieron esencialmente en:

- ü Disciplina fiscal
- ü Redistribución del gasto público
- ü Ampliación de la base tributaria
- ü Apertura Externa
- ü Liberación de mercados financieros y de capitales
- ü Tasa de Cambio competitivas
- ü Flexibilización de los mercados laborales (con o sin regulación de la desregulación)
- ü Privatizaciones
- ü Respeto por los derechos de propiedad

Este programa de disciplinamiento y reinserción acelerada, planteó desde el comienzo una discusión sobre los plazos y "costos" de la transición al nuevo modelo de mercado. En los organismos de crédito (auténticos motores de las reformas) discutieron los principistas contra los pragmáticos, quienes creyendo firmemente en el ajuste estructural, planteaban la necesidad de políticas sociales compensatorias, en inversión en capital humano y en ciencia y tecnología.

Las políticas aplicadas en nuestro país durante al década deben analizarse a la luz de este programa de reforma y ajuste estructural capitalista.

Luego de diez años el balance del Consenso de Washington se puede resumir en:

- a) El viejo rentismo y patrimonialismo se reproduce bajo nuevas formas de autoritarismo, corrupción y nuevas redes de poder invisibles tras la pantalla del mercado abierto.
- b) Las sucesivas crisis regionales y extra-regionales (1995, 1997, 1999) han mostrado la congénita inestabilidad del conjunto del sistema y la vulnerabilidad de las economías nacionales a los shocks externos.
- c) Pese al crecimiento y la estabilización, Latinoamérica sigue siendo la región con peor distribución del ingreso del planeta.
- d) La rígida aplicación de recetas monetaristas y economicistas ha sido el común denominador, por lo que los momentos favorables se desperdiciaron.
- e) Hoy siguen planteados - luego del fracaso del ajuste estructural - los desafíos del desarrollo autosostenido e integral; de la integración y la inserción internacional; la reconstrucción del estado y el poder; las políticas públicas; la superación de la pobreza y la distribución con justicia del ingreso.
- f) Se ha producido un aumento del desempleo estructural acompañado de una excesiva concentración de la riqueza.
- g) Han desaparecido empresas industriales, PYMEs, empresas agrícolas y explotaciones de carácter familiar, generándose de esta forma la destrucción de cadenas productivas.
- h) Se ha producido una pérdida irreparable de capacidad tecnológica que profundiza el condicionamiento de la región dentro del sistema capitalista.
- i) Se ha procesado una violenta destrucción del capital humano latinoamericano.
- j) Con la privatización de los bienes públicos se inició el proceso de entrega al capital transnacional de los sectores estratégicos y de los recursos naturales.
- k) Se ha procesado una profunda desestructuración de los espacios nacionales al crearse zonas ganadoras y zonas perdedoras que amenazan seriamente la integridad de los estados de la región.

El ajuste estructural en nuestro país

Desempeño de la economía

PBI. Crecimiento a precios constantes de 1983: 37% (BCU)

Demanda final. Creció 62%.

El crecimiento se explica 23% por aumento de las exportaciones y 77% por la demanda interna.

El aumento de la demanda interna se explica 16% (porcentaje referido a la demanda final) por el crecimiento de la inversión y 61% por aumento del consumo.

Déficit comercial acumulado en los diez años: 6357 millones de dólares. Para tener una indicación de la magnitud del problema, el país en 1990 tenía un superávit en la balanza comercial del orden de 350 millones de dólares, en 1995 el saldo comercial presentaba 760 millones de dólares de déficit, que se ha venido incrementando hasta los 1.120 millones de dólares de saldo negativo en 1999 (sobre datos del BCU)

Ocupación:

En la década la Población Económicamente Activa (PEA), creció un 1.4%, mientras la población ocupada creció un 0.8%. (Datos de INE).

Aumento del desempleo y Disminución de la calidad de la ocupación

Los desempleados en 1990 eran 73.000, en 1999 fueron 154.000, un aumento del 110.9%.

Estamos ante un fenómeno estructural, cuyo panorama se puede completar diciendo, por ejemplo, que en 1981, en el trimestre finalizado en setiembre la tasa de desempleo se situó en un 5,60 % y en la década de los ochenta los guarismos más altos se registraron en 1983 y 1984 (entorno al 13 %), en pleno desarrollo de la crisis de la tablita. (Vale la pena tener en cuenta que a partir de Enero/Marzo de 1998, el marco de la Encuesta en el Interior Urbano, que hasta entonces cubría las localidades de 900 o más habitantes, pasó a cubrir las de 5000 o más habitantes, de lo que se puede deducir que los porcentajes posteriores no alcanzan a describir todo el problema).

Para 1999 los subempleados fueron un 7.3% de los ocupados, equivalentes a 88.000 personas. Los trabajadores con empleos precarios fueron un 28.8% de los ocupados, los que suman 348.000. En resumen, en 1999:

Igualmente hay factores no medidos, la mayor inestabilidad laboral, las dificultades agregadas a la representación salarial por la por el cambio de conducta de los gobiernos respecto a las negociaciones colectivas por rama, el desarrollo de la tercerización "espuria", orientada a reducir los derechos de los trabajadores y o los ingresos fiscales, empresas unipersonales, etc.

Factores

Recursos

· Inversión bruta fija: creció sólo respecto al año 1990, pero sigue siendo baja: 12,7% del PBI en 1998.

· Ahorro: se mantiene en bajos niveles (14% del PBI a precios corrientes en toda la década), particularmente el ahorro nacional, el que a largo plazo por lo menos es el sostén de la inversión.

· Educación: Se mantiene bajo gasto, entorno al 3 % en el período 1996/1999, reforma educativa mediante. Para tener una base de comparación de largo plazo, en 1964 el porcentaje que el Estado Uruguayo destinaba a la Educación era superior al de la región. Treinta años después, la media en América Latina y el Caribe es del 4.5 %, y nuestro país tiene un gasto público en educación igual o inferior a El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Haití (Informe Mundial sobre Educación 1998, Ediciones Unesco)

Políticas aplicadas

Prioridades

- estabilización
- ingreso de capitales (apertura, etc.)

Instrumentación

Lo conocido: control del déficit fiscal y del ritmo devaluatorio, leyes para promover el ahorro y la inversión (sin éxito), apertura comercial unilateral y MERCOSUR, reforma en la seguridad social y otras medidas que van en el sentido dominante del momento, incluyendo la decisión de no convocar a Consejos de Salarios por rama (con pocas excepciones) y no transformar en obligatorio a todas las empresas de la rama la aceptación de los acuerdos en los mismos, etc.

Resultados

- * Estabilización exitosa, no obstante el impacto fiscal preelectoral del 94 y del 99 siguió reduciéndose la inflación
- * Creció ingreso de capitales del exterior pero: a) sirvió para financiar el déficit fiscal, b) sólo en parte menor se destinó ampliar la capacidad de producción competitiva, c) predominio de captación de corto plazo.
- * Consecuencias directas de la política: a) negativas para los productores de bienes no transables: retraso cambiario del orden de 50% entre ambos extremos de la década,
- * Deterioro sustancial de la capacidad de competir en transables, sea por exportaciones o en competencia con importadores. Se agregó el atraso cambiario con la apertura unilateral y el MERCOSUR.
- * Positivas para algunos sectores de no transables, importadores, financiero, (al que continuaron aplicando los salvatajes necesarios) y otros con medidas de fomento específicas (forestal, "automotriz").
- * Condiciones adversas para las organizaciones sociales, particularmente sindicales, derivadas de desempleo, la precariedad, la nueva política respecto a los consejos de salarios y otras.

Fracasos (desde nuestra perspectiva):

- Exposición desmedida a condiciones externas (falta de control sobre capitales de corto plazo, endeudamiento para financiar déficit, etc.) que facilitan fuertes oscilaciones en la economía y, más dramáticamente, en el empleo.
- Promoción del ahorro: debido a que Fondos de Inversión, Obligaciones Negociables y AFAPS tuvieron un vuelo bajo (ésta última por colocaciones en el sector gobierno, cuyo nivel de inversiones es del orden del 5% de los egresos)
- Inversiones. Insuficientes medidas compensatorias del atraso cambiario y otros (reducción de contribución a BPS y otras), favorecieron algunos sectores como el forestal y el turismo, en que crecieron, limitado alcance de la "Ley de Inversiones".
- Mayor desempleo, deterioro en calidad, fluctuaciones fuertes.
- Creciente distancia entre las condiciones de vida de los dos extremos sociales, con tendencia a la exclusión social de una parte, lo que supone un deterioro relativo de la calidad de vida de una parte de la población y su desvinculación con el conjunto del país.

La herencia neoliberal. La agenda social y la agenda de la producción y el trabajo.

A partir de mediados del decenio, un conjunto de indicadores de situación social comienza a experimentar deterioros. Esta es, junto con destrucción del aparato productivo, la herencia más pesada del ajuste estructural llevado adelante por la derecha.

Algunos de estos cambios son:

- * Se acentúa la regresividad de la distribución del ingreso
- * La pobreza se concentra esencialmente en los niños y en los jóvenes. El 50 % de los nacimientos se concentra en el 16 % de los hogares más pobres.
- * Crece la segmentación y la segregación residencial, social y cultural, que se refleja en el sistema educativo, expresando una creciente ruptura del "espacio público" urbano.
- * La acentuación y prolongación de la crisis genera la sensación de falta de expectativas que provocan el recomienzo del fenómeno emigratorio.
- * Estancamiento y destrucción de la producción nacional, rentabilidad nula y falta de competitividad.

Los cambios sociales

En lo que sigue definiremos cuatro grandes ejes en los que creemos se concentra lo central de los cambios en la sociedad uruguaya. Se trata de presentar una síntesis que permita ordenar el análisis y la elaboración de políticas.

Nuevos aspectos de la pobreza

El fenómeno de la pobreza se ha complejizado, y ya no es solo un problema de ingresos económicos. Dos dimensiones hay que tener en cuenta al considerar esta variable: la estructura generacional y la desigualdad y segregación social.

a) Modificaciones de la Estructura Generacional :

- Envejecimiento crítico de la población: El Uruguay se acerca a la fase de post-transición demográfica, en la cual la población dependiente, población no-económicamente activa, tiende a aumentar debido a una baja tasa de crecimiento demográfico y envejecimiento de la estructura de edades. Se estima que para el año 2010 el cociente entre población activa y población dependiente será desfavorable.
- El Estado y su Sistema de Seguridad Social, atendió y frenó el deterioro de las condiciones de vida de la población de la tercera edad: Los jubilados lograron crear un movimiento social, que fue capaz de conseguir el apoyo de la ciudadanía en el plebiscito de 1989, conformando una fuerte identidad en torno a la imagen heredada del Estado Protector y de Bienestar que fue el referente de la sociedad uruguaya hasta hace 2 ó 3 décadas. Los beneficios se tradujeron en el crecimiento de las pasividades reales, disminuyendo el porcentaje de hogares pobres con jubilados y pensionistas que lo integren, y el porcentaje de personas pobres de 65 años y más. Esto claramente aumentó y direccionó el gasto social del Estado hacia este sector. Hay que tener presente, sin embargo, que gran parte de este mayor gasto está dirigido a la financiación de la transición - tremendamente onerosa para el Estado uruguayo - desde el sistema del reparto universal al sistema mixto, centrado en las administradoras de fondos previsionales.

b) Desigualdad y Segregación Social:

- Infantilización de la pobreza y vulnerabilidad de los jóvenes: Entre los años 1989 y 1997 la pobreza infantil no solo no acompañó el descenso general, sino que aumentó levemente. La mitad de los niños de entre 0 y 5 años, viven en hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 40 % de los niños entre 6 y 13 años vive en hogares pobres. Este es el sector de mayor vulnerabilidad

ante las fluctuaciones económicas y sociales, sin contar el mismo con capacidad de movilización y presión sobre el sistema político. Los jóvenes entre 14 y 29 años son los que sufren la mayor desocupación y subocupación.

Cuando en el período 1989-1997 la tasa promedio de desocupación es del 10%, para los jóvenes de dicha edad no bajó del 17 %, superando a partir de 1996 el 20 %. Se suma a la situación de falta de empleo y las bajas remuneraciones de los empleos que ofrecen las empresas.

- Estratificación de los resultados escolares: El contexto social de la escuela, implica desigualdad en la adquisición de destrezas y saberes. La asistencia y repetición en el primer año escolar tienen una relación clara. Cuanto más desfavorable es el contexto, más altos son los niveles de inasistencia y repetición.

- Rutas de emancipación diferenciadas para sectores medios y bajos: Resulta muy problemática la emancipación juvenil, generando problemas para mantener una familia en aquellos jóvenes que se emancipan tempranamente, claramente los de menores expectativas y posibilidades por falta un adecuado nivel educacional y una herencia cultural pobre en elementos que permitan asimilar los instrumentos de conocimiento necesarios; y retrasando la emancipación en los jóvenes con mayores posibilidades educacionales, por contar con expectativas de mayores ingresos. Claramente, los estratos de jóvenes más bajos en cuanto a nivel socioeconómico son los que ingresan al mercado de trabajo y forman familia, más tempranamente. En consecuencia soportan el peso de la reproducción biológica y la educación de las nuevas generaciones. Por su parte los jóvenes de mayores posibilidades socioeconómicas, se independizan y forman familia tardíamente, a raíz de que el mercado despide señales negativas en cuanto a la asociación entre la inversión educativa y el logro de metas ocupacionales y de ingresos deseables para estos jóvenes. Debido a ello, tienen menos hijos y demoran en asumir niveles de responsabilidad y compromiso en la estructura social.

- Ingreso masivo de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo: Especialmente en el tramo de entre 20 y 29 años alcanzó en 1998 para el país urbano a 71,1%. Esta situación influye sobre la capacidad de la familia para hacerse cargo de la educación y socialización de los niños en sus primeros años de la infancia, lo que se suma al creciente debilitamiento de la estabilidad y de la organización familiar. Como contrapartida las mujeres jóvenes de sectores medios altos conforman el 68% de los estudiantes de la Universidad de la República.

Cambios en el mundo del trabajo

a) Desocupación y Precarización del Empleo:

Se multiplican los indicadores que tienen que ver con ambos aspectos.

- Aumento del Desempleo Estructural: Las cifras históricas del desempleo que se situaban entre el 7% y el 9 %, fueron superadas largamente, llegando hoy a niveles del 16 %.

- Achicamiento del Estado: En el período que va desde 1986 a 1998, los funcionarios públicos pasan de ser el 24% de los trabajadores urbanos al 16.3%, con lo que se reducen empleos estables y formales.

- Proceso de Desindustrialización: genera el más alto desempleo en la industria, llegando al 16,8 % en Montevideo a noviembre del 2000.

- El Sector Servicios se consolidó como el que más aporta al Producto Bruto Interno del país: Este sector es el que tiene las características más marcadas de precariedad, heterogeneidad, e incertidumbre del empleo.

- Tercerizaciones: Nuevas modalidades de contratación con contratos laborales exentos de las protecciones de seguridad social y salud, con contratos no salariales sino mercantiles; es decir contrato de empresa a empresa (unipersonales).

b) Algunas consecuencias más impactantes que pueden enumerarse:

La introducción de tecnología desplaza la mano de obra masiva: Robots, máquinas de control numérico, programas informáticos de diseño, de administración, de servicios; realizan tareas sin necesidad de intervención del trabajador.

Las denominadas blandas o tecnologías de gestión, enmarcadas en el discurso de la calidad total, sólo han sido pasibles de ser implantadas en las actuales condiciones de flexibilización y desregulación. La apropiación del conocimiento práctico y de la creatividad de los trabajadores, la generación de actitudes que en nombre de la competitividad de la empresa desestructuran la identidad de clase, han contribuido a la descalificación de la mano de obra, en estrecha vinculación con las modificaciones infraestructurales producidas por las nuevas tecnologías, paquetes informáticos, de gestión de procesos, etc.

La contradicción generada por el desempleo se desplaza fuera del sistema productivo: Los desempleados no generan presión sobre las organizaciones productivas, porque ya no son necesarios. La tecnología será más barata que la mano de obra.

Los sindicatos pierden presencia y poder en las relaciones laborales: La caída de la afiliación por la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de influencia por el creciente control tecnológico, inciden en el debilitamiento de los sindicatos.

La construcción de identidad social a partir del trabajo se desmorona: La desaparición de los oficios artesanales y aún de las especializaciones en la industria; lleva consigo la pérdida de rol y status de los trabajadores de esas actividades, colocándolos en la despojada condición de "empleado".

La función de integración social y política del trabajo se debilita: A partir del alejamiento del ámbito laboral y de sus corporaciones, el trabajador desempleado comienza un proceso de marginación, apareciendo las llamadas patologías sociales. Los sentimientos individuales se transforman en colectivos. Así el pesimismo, el fatalismo, la frustración, el aislamiento, las crisis familiares; desembocan en marginación, crisis de identidad, crisis de valores, vicios sociales y la ausencia y/o desencanto por los "proyectos colectivos".

Creciente urbanización

Las ciudades han sido el espacio político original en el capitalismo y han dado lugar a la elaboración del concepto de ciudadanía. El desarrollo de la democracia no es concebible sin éste marco. Es obvio que los cambios en la ciudad tienen consecuencias políticas importantes.

- La población rural del país sufre un constante proceso de reducción en cantidad: Entre los años 1985 y 1996 para el total del Uruguay, esta población se redujo en un 22%, con 11 departamentos por encima de la media.
- Segregación Residencial en las ciudades: Polarización del territorio, dando paso a la conformación de barrios marginados - tanto en el uso del territorio como en el acceso a servicios - cuya contrapartida la constituyen los barrios cerrados tipo country .
- Pérdida de importancia del espacio público: Desaparición del espacio público como punto de encuentro de los distintos sectores de la población con diferentes culturas y recursos materiales y simbólicos; a lo que se suma la conformación de espacios privados para el consumo de las clases pudientes.
- Privatización de la seguridad ciudadana: En 1999, el 70 % de la población montevideana declaraba tener poca o ninguna confianza en la policía. y el 66% poca o ninguna en la justicia. Desde 1986 los registros anuales de armas de fuego,

presentan un continuo incremento; mientras que entre 1991 y 1995, las empresas privadas pasaron de 96 a 185.

Nuevas formas de consumo y ejercicio de la ciudadanía

La ideología hegemónica ha consolidado al Mercado como al espacio regulador de la vida social y sus valores se han ido incorporando a todos los ámbitos de la misma. Es claro que el mercado funciona a partir de la participación de los consumidores. Esta identidad es la que se torna más fuerte en la vida de las personas, incluso que la ciudadanía. Tanto bienes y servicios materiales como culturales son adquiridos y consumidos en la lógica del consumo; donde los valores emergentes son el acceso a bienes y servicios y las variables determinantes ya no son las socioeconómicas sino los estilos de vida.

- Crecimiento sostenido de la Renta per cápita: Evolución muy importante de las cifras de renta; pasando de 2679 dólares en 1988 a 6348 en 1999. Esto implica pautas de consumo muy desarrolladas en los sectores medio-altos de la población; y expectativas de consumo para todas las capas sociales como consecuencia de la influencia de los medios de comunicación masivos.

- Expansión del crédito al Consumo: A pesar de un leve descenso en los dos últimos años, el monto del crédito al consumo en el Uruguay superó los mil millones de dólares en el 2000.

- Ampliación de la oferta y acceso a los medios masivos de comunicación: En los últimos años todo el país cuenta con acceso a la televisión de abonados, vía cable o vía satélite.

- Espectacular crecimiento de servicios y productos de telecomunicaciones: Expansión y satisfacción de la demanda de telefonía básica (75 % de los hogares uruguayos cuenta con servicio telefónico); la telefonía celular alcanzó una tasa de penetración por encima del 12 % a fines del 2000; el porcentaje de usuarios de Internet es altísimo (para Uruguay 10%)

- La Identidad se consolida en torno al consumo: Mientras decaen las identidades ideológicas, políticas, laborales, etc; ganan prestigio las identidades ligadas a los estilos de vida; en donde el consumo juega un papel fundamental. Todos los valores son filtrados por el mercado; inclusive la política.

- Cambios en el Ejercicio de la ciudadanía: La práctica política sale del ámbito del club o comité partidario y el espacio público; para ser parte de los medios masivos de comunicación. Los ciudadanos cada vez más acostumbrados al consumo y al lenguaje del marketing, consumen la política como cualquier otro producto.

- Incertidumbre sobre el futuro: Dificultades del país para generar horizontes a largo plazo en materia de bienestar y protección social. Pérdida de la esperanza por parte de los ciudadanos, a falta de un proyecto colectivo de país que le dé sentido a la vida individual, consolidando un fenómeno migratorio de muy peligroso para el futuro del país.

Las transformaciones necesarias

Esta herencia de una década de recetas neoliberales genera, para las fuerzas progresistas, desafíos cada vez mayores y más complejos.

Estamos ante la peor situación económica de los últimos 20 años. Si bien algunos de los indicadores no han alcanzado los rangos críticos que alcanzaron a partir de crisis de la "tablita", los problemas del empleo, de la producción, de la inserción internacional y varios indicadores de bienestar social vienen en una larga tendencia de deterioro -especialmente desde mediados de la década de los noventa- mostrando su carácter estructural.

Ante esta situación no existe en la coalición de derecha, ni voluntad ni márgenes para actuar sobre la crisis, ni siquiera para atenuar algunos de sus efectos. Las políticas adoptadas repiten las recetas que hoy están profundamente cuestionada en el debate político internacional.

El fundamentalismo de la libertad del mercado como único instrumento va acentuar aún más la retracción de mercado interno y el estancamiento productivo. No se sabe que va a pasar durante el nuevo ajuste y después.

Dado que no se ven salidas claras a la crisis - más bien su agudización - se pueden generar situaciones de confrontación social de consecuencias imprevisibles.

Se impone poner encima de la mesa por parte de las fuerzas políticas progresistas, junto con la sociedad civil organizada, un conjunto de agendas ineludibles:

- * La agenda social
- * La agenda por la producción y el trabajo
- * La agenda de la reconstrucción del Estado, para fortalecer las políticas públicas y la participación ciudadana.

Nuestro enfoque parte de la definición de Agendas de desafíos que tiene planteados la sociedad uruguaya para generar un modelo de desarrollo integral, económica y ambientalmente sustentable. Es la priorización de los nudos que ofrecen mayores dificultades, que hacen a temas estructurales. La estructura de las Agendas mostrará a todos cuales son la señas de identidad centrales de nuestra propuesta de país. Preferimos este enfoque a uno que se ciña a la estructura institucional del sector público porque nos parece que clarifica mejor nuestra posición y nos ayuda a organizar el trabajo de planificación y propuesta.

Trabajar la Agenda del Gobierno Progresista implica definición de objetivos y también, lo que nos parece igualmente importante, de instrumentos, de recursos y de planes estratégicos de gestión. De lo que se trata es de que sepamos cuales son la medidas inmediatas, la de medianos plazo y, especialmente, aquellas acciones que muestren la orientación que el gobierno progresista imprimirá en las distintas áreas.

Estas Agendas, que se articulan en un plan de Gobierno, son parte de la imprescindible búsqueda de la conformación de un proyecto nacional, integrador, productivo, que inserte al país en la región y el mundo, que sea capaz de generar confianza y entusiasmo.

Se trata de un proyecto transformador, de signo progresista, centrado en las necesidades de las grandes mayorías, de contenido económico, social y cultural.

Solo en este contexto de proyecto abarcador y transformador cobra sentido las Agendas y las propuestas concretas de signo programático. Los cambios profundos no van a ser instantáneos, sino que serán el fruto de un trabajo constante y sistemático.

También es en este contexto, que debemos situar el papel del Estado y su reforma con sentido progresista.

La Reforma del Estado desde la perspectiva progresista

A pesar de su creciente descrédito y del virtual desmantelamiento a que lo ha sometido la investida neo-conservadora, el Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación social

Este Estado puede transformarse en una herramienta indispensable para llevar adelante los grandes cambios que supone nuestro proyecto político, o, por el contrario ser un lastre que termine dificultando la implementación de estos cambios.

Por lo tanto, el éxito o fracaso de nuestro proyecto está condicionado en buena medida por el desempeño del Estado. Si el Estado no se hace eficiente y protector, indefectiblemente fracasará nuestro proyecto político y se abrirán las puertas a la liquidación del mismo.

Creemos que el concepto mismo de Reforma del Estado está profundamente ligado al concepto de cambio y de innovación, que son la esencia misma de un proyecto progresista de país. Por lo tanto es imprescindible que la izquierda reivindique claramente la Reforma del Estado como un proyecto propio.

La misma, en un sentido progresista, debe sustentarse e insertarse necesariamente en un gran proyecto político-cultural de largo aliento.

Desde la derecha se ha venido inculcando una suerte de posición maniquea que asocia lo estatal a lo no rentable y lo privado a lo rentable, lo estatal a lo burocrático e ineficiente y lo privado a lo contrario.

Decir que las empresas privadas son más eficientes que las públicas no pasa de ser un cliché ideológico falso y si bien puede tener cierta contrastación empírica no es por un tema jurídico sino fundamentalmente la cuestión pasa por un tema político-económico de gerenciamiento y administración de recursos.

El sentido de la eficiencia y de la eficacia no son patrimonio exclusivo de la derecha ni del ámbito de lo privado. La eficiencia en el Estado no es un concepto de derecha ni de izquierda sino un imperativo ético en el manejo de los recursos públicos; así como la eficacia es una condición necesaria para el logro de los objetivos estratégicos del Estado.

Esa supuesta ineficiencia del Estado es invocada permanentemente por la derecha conservadora como justificación de los procesos de privatización. Aún cuando es constatable que determinadas áreas del aparato estatal tiene cierto grado de ineficiencia, el análisis de sus causas nos remiten con, entre otras, al clientelismo político practicado desde siempre por la derecha en el gobierno. Éste ha permitido que exista en ciertos sectores de la burocracia una propensión, no sólo a la ineficiencia sino también a la corrupción que ha sido funcional a dicho sistema clientelístico.

En tanto la responsabilidad recae en los sectores que dirigieron el aparato estatal, y en la medida que la estructura de dicho aparato es jerárquica y piramidal, la ineficiencia y la corrupción deberán ser combatidas de arriba hacia abajo, asignando a cada quien su cuota parte de responsabilidad, sin ceder a lugares comunes que responsabilizan por igual la de todos los funcionarios públicos.

En realidad, esta tendencia a la privatización que se manifiesta desde el proyecto neo-conservador beneficia solamente a ciertos grupos económicos poderosos en perjuicio del conjunto de la sociedad, creando una especie de "Estado privado" que se opondría entonces al concepto mismo de Estado pues el interés general como presupuesto básico de la acción estatal guarda una estrecha relación con las potestades públicas que dinamizan y regulan la misma hacia objetivos de bien común o de interés general.

En la agenda progresista de la Reforma, la misma deberá orientarse a la transformación del aparato político básico del Estado en su conjunto, democratizándolo en el sentido de que sean las grandes mayorías nacionales que detentan el poder de conducción del Estado, poniéndolo verdaderamente al servicio del ciudadano/usuario

Desde nuestro punto de vista, no es posible generar transformaciones importantes en el Estado, si no actuamos en la esfera de la sociedad en su conjunto, apuntando a revertir pautas culturales y las relaciones de poder que se establecen.

El gran desafío que se plantea a un futuro gobierno progresista es como lograr la necesaria transformación desde adentro mismo de este Estado, para permitir una gestión eficaz en la resolución de los grandes problemas que deberá enfrentar.

No cabe duda que la valoración acerca del rol del Estado tiene claras connotaciones ideológico-políticas, en función de cada circunstancia en particular. Pero no es menos cierto que si bien necesaria, la orientación ideológica por sí sola no asegura el logro de los objetivos que se definan en la agenda. Esta no nos dará todas las respuestas al cómo se deben hacer las cosas y quien debe hacerlas. Esto último tiene que ver fundamentalmente con un tema de gestión humana compleja y de metodologías de abordaje de los diferentes aspectos de la realidad social y de la articulación entre los diferentes actores sociales.

La experiencia demuestra que los diferentes intentos por introducir cambios en los modelos de gestión se han enfrentado a múltiples dificultades, ya que los aspectos componentes de la cultura organizacional son los más resistentes a los cambios, en la medida en que estos afectan e interfieren con hábitos, seguridades, roles asumidos, posiciones de poder, etc...Será necesario por tanto reformar el sistema de gestión hacia adentro del Estado, generando cambios culturales irreversibles, sin perjuicio de los necesarios cambios en tecnologías de gestión.

Se trata entonces de encaminarnos hacia modelos de gestión que prioricen la integración y la participación, que tiendan a la articulación social, fortaleciendo redes, de forma que los cambios se produzcan con los propios beneficiarios. No se trata solamente de administrar recursos sino de diseñar y gestionar políticas públicas.

Las posibilidades de incidir en forma efectiva y generar cambios en el tejido social existente, requieren de decisiones que presenten posibilidades reales de implementación. Estas decisiones deberán estar basadas en delicados procesos de negociación y concertación, de articulación de diferentes actores sociales.

Asimismo, la Reforma del Estado deberá apoyarse en estrategias adecuadas con relación a los Recursos Humanos. Un aspecto prioritario e imprescindible de un futuro gobierno progresista debe ser una fuerte inversión en capacitación a todos los niveles. Esta capacitación no implica solamente transferencia de conocimientos o tecnologías sino fundamentalmente la generación de valores que surjan de un amplio proyecto político-cultural.

El Estado en manos de un gobierno progresista debe subordinar su accionar a un fin supremo del mismo signo y este, no puede ser otro que la transformación del Estado en un factor privilegiado para la búsqueda de la justicia social.

Ante un modelo global que acentúa y profundiza la concentración, la exclusión y la marginalidad social, el Estado debe constituirse en una poderosa herramienta que sea capaz de enfrentar los crecientes niveles de inequidad social y que a su vez, concomitantemente, se proyecte como palanca de un desarrollo socio - económico sustentable, intrínsecamente nivelador.

La clave del éxito de una reforma del Estado en un sentido progresista pasa por la combinación de ambas facetas del Estado y para ello deben introducirse criterios de mayor eficiencia y productividad en la estructura estatal junto a políticas sociales más profundas y eficaces.

En síntesis, deben combinarse los objetivos sociales con los medios económicos.

En nuestra concepción, el Estado debe asumir un rol protagónico a la hora de la definición e implementación de las grandes políticas nacionales.

Todas las experiencias internacionales en procesos de desarrollo sostenido revelan que se requiere un fuerte e innovador grado de intervencionismo estatal que haga posible lograr una imprescindible acumulación de capital, innovación tecnológica y

apertura de mercados para la exportación.

Los objetivos estratégicos del Estado progresista pasarían por 4 ejes fundamentales:

La potenciación del desarrollo de los cometidos esenciales.

Es necesario potenciar al máximo aquellas actividades que al Estado en su condición de tal le son inherentes, exclusivas y excluyentes, como ser la función legislativa, la seguridad y defensa, la política exterior, la administración de justicia o las finanzas públicas, la defensa y conservación de la integridad ambiental de su territorio.

La conducción de las áreas estratégicas del país.

El Estado debe tener a su cargo la responsabilidad de la conducción de las áreas estratégicas del país. Estas son, básicamente, los combustibles, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, recursos hídricos, fluviales, los puertos (tanto marítimos como aéreos) y la Banca Pública.

Estas áreas deberán estar gestionadas a través de empresas públicas que deberían seguir manteniendo la naturaleza jurídica de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.

El Estado progresista debe procurar que las empresas públicas acrecienten su valor económico tanto sea en un esquema monopólico como en un marco competitivo. No se puede admitir para las áreas estratégicas un marco competitivo totalmente desregulado ya que el Estado de un país pobre no tiene el poder económico para competir en igualdad de condiciones con las transnacionales, además de la definición de estas áreas estratégicas implica que su debilitamiento o pérdida de control por parte de la sociedad (a través del Estado) afecta la soberanía del país. La desregulación no debe hacerse con el fin exclusivo, como pretende la derecha, de que ganen los agentes privados (generalmente poderosos grupos económicos transnacionales) y pierda el Estado. Esto no pasa de ser una postura ideológica.

Los monopolios, así como las concesiones, son ante todo herramientas jurídicas que no pueden transformarse ontológicamente en una cuestión de principios sino que deben ser vistas como cuestiones estratégicas para el desarrollo de políticas públicas.

El Estado progresista debe preservar el monopolio estatal sobre las áreas estratégicas del país mientras se prepara a los entes estatales para un nuevo escenario regional y mundial. y en tanto las mismas revistan un carácter monopólico y sean desarrolladas por empresas públicas, el marco jurídico que ofrece mayores garantías a todos es el Derecho Público como expresión jurídica del interés general; sin perjuicio de no estar cerrados a considerar la posibilidad de mejorar el marco del derecho público con la finalidad de asegurar un mejor funcionamiento, mayor eficiencia y sobre todo, que puedan posibilitar una real competitividad a nuestras empresas en el marco regional. La mejora del marco del Derecho Público no debe implicar en ningún caso medidas que afecten el objetivo central de las empresas públicas y de asegurar al país los recursos estratégicos necesarios para su desarrollo y los servicios básicos a su población, así como tampoco la estabilidad laboral ni otros derechos de sus trabajadores. El desarrollo de la competitividad de nuestras empresas públicas se torna imperioso en la medida que el país necesita de divisas y en estos momentos, las únicas entidades que se las pueden dar en una magnitud considerable son las empresas públicas invirtiendo en el exterior.

Por otro lado, debemos introducir cambios sustanciales en los niveles directrices de las empresas públicas, cuyo perfil deberá integrar adecuadamente criterio político y solvencia técnica.

Hay que promover la integración de los funcionarios en la dirección de las empresas públicas para ir evolucionando en ulteriores etapas, a la integración de los propios usuarios.

El Impulso y Articulación de Políticas Sociales

La política social no puede ni debe estar disociada del proyecto productivo. La política social del estado asistencialista uruguayo se caracterizó en el pasado por su formulación particularista y clientelista, por la masificación de sus beneficios y por su falta de coherencia y orientación. Esto era posible en el marco de una economía sin mercado, en una economía altamente regulada y orientada al mercado interno. Esta realidad ha cambiado dramáticamente y como se señaló más arriba el país y particularmente los trabajadores están pagando los costos de la apertura indiscriminada. Sin embargo la apertura es ineludible. Como se expondrá más abajo es necesario que el país apueste a proyectos productivos que apunten al crecimiento de la productividad y la exportación. Esto significa que la política social debe constituirse en un estímulo para que los trabajadores se orienten a actividades productivas

Tanto desde el punto de vista del financiamiento como de los beneficios la política social debe apuntar a la progresividad. Pero esto no es suficiente. El país invierte hoy sumas importantes de su presupuesto en política social. Pero como el actual modelo de política social responde al particularismo, esto se refleja en su estructura institucional y en el modelo de ciudadano que constituye. Desde el punto de vista institucional existe una fragmentación altísima de organismos públicos que superponen su intervención haciendo irracional, ineficaz, ineficiente y cara la administración de los programas. En segundo lugar la fragmentación no reconoce que los individuos en tanto ciudadanos son sujetos con una multiplicidad de roles a lo largo de su vida. Son vecinos de un barrio o de una localidad, son padres o madres, trabajadores, jubilados, niños, etc. Los individuos viven un ciclo de vida completo y esto la política social no lo reconoce. Su reconocimiento significa la integralidad de la política social, es decir que los individuos deben ser reconocidos en su ciclo de vida como seres complejos y con situaciones de vida diferenciales. Esto no significa propugnar por una política social compensatoria, como propone el modelo neoliberal, significa por el contrario apuntar a una política social integral.

La política social compensatoria crea situaciones diferenciales y las consolida, apunta a revertir los efectos negativos del ajuste estructural pero pretende focalizar en los más pobres. De esta forma se crean programas para pobres que son distintos que los programas para ricos. La política social compensatoria segmenta y estigmatiza a los ciudadanos brindando programas de segunda para los pobres y de primera para los ricos. Una política social integral y universal debe invertir esta realidad dando mejores programas a los más pobres y apoyando la financiación de los mismos en los que más tienen, introduciendo una financiación de los programas apoyada en el impuesto a la renta de carácter progresivo. Pero además reconoce que la política económica no puede diseñarse sin tomar en cuenta la política social y la medio-ambiental. Debe formularse, además, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los ciudadanos y reconocerlos en su multiplicada de roles. El gobierno progresista, por lo tanto, deberá, analizar con cuidado la estructura institucional de la política social, eliminar la superposición institucional, buscar la coordinación entre organismos de política social, pero deberá, fundamentalmente, diseñar política social en consonancia con la política económica y viceversa.

Entre otros factores esta fue la razón central de la reforma del sistema de seguridad social que hoy padecemos. La izquierda no supo, en los momentos claves estar a la altura de las circunstancias y no fue capaz de presentar un modelo alternativo de seguridad social porque se apegó a un modelo de sociedad inexistente.

En el campo de las políticas sociales - objetivo prioritario del E. Progresista - es imprescindible, en primer lugar, el diseño de una política global en esta materia que opere como marco referencial.

En este marco es absolutamente necesario la instrumentación de una coordinación institucional de los organismos públicos involucrados en el diseño y desarrollo de

políticas sociales (MSP, MVOTMA, MTSS, INAME, INJU, etc.)

También se hace necesario lograr la participación de los actores organizados en torno a la más diversas temáticas sociales.

Debemos dotar de más recursos destinados a políticas sociales pero, concretamente, optimizar al máximo estos recursos para que lleguen a la gente y no se pierdan o dilapiden en la maraña burocrática.

La Orientación y promoción de actividades productivas

El Estado progresista debe dar señales al mercado acerca de cuales son aquellas áreas productivas que, llevadas adelante por los particulares, se consideran prioritarias en el engranaje productivo del país.

El Estado no puede estar prescindente de todas aquellas actividades productivas privadas que, en el marco de una política de desarrollo global, se consideren como motores de la misma.

A modo de conclusión diremos que estos ejes temáticos se insertan en el desarrollo de una estrategia estatal global.

Para llevar adelante con éxito esta estrategia, el gobierno progresista debe asegurarse el control de la dirección del Estado es decir, aquellos niveles directrices (que no necesariamente pasan por los cargos políticos o de particular confianza sino que muchas veces van más allá) que marcan las pautas y el ritmo de hacia donde debe orientarse la gestión del aparato estatal.

Tesis 3: El acuerdo social. La gobernabilidad desde el punto de vista de la izquierda

Nunca antes como ahora la humanidad tuvo tanta capacidad de innovarse ni dispuso de tanta riqueza, pero también nunca antes ha sido tan grande la diferencia entre ricos y pobres, ni ha habido tantas expresiones de fracturas y exclusiones sociales.

Solamente desde una perspectiva progresista y de izquierda puede asumirse la responsabilidad histórica de elaborar e impulsar un proyecto que, como alternativa al decadente fundamentalismo conservador, revitalice el humanismo y ponga la economía al servicio de la gente. Asumir en relación a ello la importancia del desarrollo económico, del crecimiento, de la distribución con justicia social para lograr la superación de la calidad de vida de la población, y la búsqueda de los caminos de diálogo y encuentro de la sociedad en torno a ese objetivo, constituye un desafío fundamental.

La inmensa mayoría de los analistas coinciden en que el impacto de las reformas estructurales de los noventa en Uruguay, -inspiradas casi al pie de la letra en las recetas del Consenso de Washington- se vio amortiguado, si se lo compara con el conjunto de la región. Este desempeño de las políticas puede tener explicación en: las condiciones de entorno externo favorable que vivió el país hasta 1998; y el vigor mostrado por las organizaciones de la sociedad civil, que encontraron vías de acuerdos y de movilización que frenaron los embates más fundamentalistas de la derecha. Para dar sólo dos ejemplos: plebiscito contra la ley de empresas públicas de 1992 y reforma constitucional sobre ajustes de pasividades de 1989. Esto muestra de que si se plantean objetivos claros, de extendido impacto existe en nuestra

sociedad espacio para acuerdos que involucren a amplios y disímiles sectores.

Justamente la gobernabilidad que debe plantear la izquierda tienen que basarse en la riqueza del tejido social que históricamente ha sustentado a nuestro país, más que esto debe fortalecerlo, generando políticas públicas y ámbitos de debate transparente y accesibles a toda la población.

La aplicación de las políticas dominantes, - que además de sus contenidos económicos y sociales implican un modelo institucional con signos autoritarios, no dialogante y de imposición unilateral de resoluciones - que orientan los innegables cambios sociales, culturales y en la base productiva, -tal como decíamos anteriormente- van generando fragmentación, crisis de representación y legitimidad de las organizaciones sociales históricas, surgimiento de otras nuevas, repliegue hacia lo individual y cuestionamientos a la efectividad de la acción colectiva, así como surgimiento de nuevos emprendimientos sociales.

El retroceso del Estado, la sobre-exposición a los choques externos, el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis de participación han ambientado el debilitamiento cada vez mayor de las redes solidarias, de seguridad y equilibrio social. Se destaca entre estos el fenómeno de la concentración de la pobreza en los sectores más jóvenes de la sociedad lo que anuncia, de no ser abordado urgentemente, una polarización de la sociedad uruguaya de imprevisibles consecuencias.

El acuerdo social tras un modelo de desarrollo justo y con futuro implica dar cuenta de estos fenómenos, saber que si bien el modelo de la derecha tiene todavía margen de aplicación, no puede dar más, a no ser aumentar la deuda social y productiva. Se le agota cada vez más rápidamente la capacidad de generar consensos activos en torno a sus políticas. La izquierda es la única fuerza política que puede y quiere concretar el amplio acuerdo social que el país necesita. De lo que se trata, en definitiva, es de generar un modelo de crecimiento que genere los consensos sociales que hoy no existen.

La izquierda hoy desde la oposición, pero más aún desde el gobierno, tiene voluntad de diálogo, cultura de acuerdo, sobre la base de principios y de un proyecto de desarrollo. No creemos en el acuerdo y el diálogo por debilidad, sino por el contrario para nosotros son instrumento de gobierno, forma de hacer política democrática en con seriedad y compromiso con las grandes mayorías.

Esto implica la creación de una nueva hegemonía de actores sociales, de sectores productivos, de integración de la diversidad y la riqueza social. Implica las cuestiones de poder, que desde la izquierda para por el debate democrático, por la claridad de propuestas, no por la imposición de la fuerza de la mera autoridad y del poder económico. Construir esta nueva hegemonía es crear una nueva cultura democrática gobierno y de ejercicio del Poder Político.

Los desafíos del crecimiento sustentable, de la superación de las desigualdades, de la profundización democrática con el fin de ampliar y profundizar la creación de ciudadanía deben ser recogidos por un proyecto de país de amplio consenso, que al principios del nuevo milenio le de a las grandes mayorías esperanzas, horizontes de realización individual y colectiva; que permita la expresión de los más débiles, que escuche a las organizaciones de trabajadores, de productores y empresarios con voluntad de acuerdo. Desde nuestro punto de vista la construcción de este proyecto nacional pasa por la convocatoria a un Acuerdo Social por el crecimiento económico con progreso humano en un modelo de desarrollo sustentable.

La señal de identidad central del acuerdo social planteado por el gobierno progresista tiene que ser la democratización, el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y el crecimiento con justicia. Hay que apostar a la potencialidad del rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras. Se trata de una convocatoria amplia, sin exclusiones, en la que cada sector deberá

contribuir a los objetivos planteados.

El acuerdo no elimina el conflicto sino que debe generar una manera distinta de resolverlo y de búsqueda de síntesis, que se debe realizar bajo el signo de la participación, del involucramiento y del compromiso.

El proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales, políticos y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al crecimiento productivo.

Esta propuesta de gobernabilidad se sustenta en la capacidad que ha demostrado la izquierda y las fuerzas progresistas de procesar las amplias alianzas sociales y políticas que conforman el Bloque Popular Alternativo, el que será expresado políticamente por un Gobierno de Mayoría Nacionales. Esta estrategia de alianzas no debe ser confundida con la propuesta del Acuerdo Social, que implica, en caso, ampliar la capacidad de diálogo y tender puentes a cada vez más sectores de la sociedad uruguaya.

Claramente esta propuesta supone una visión alternativa a la de la democracia minimalista. Sin plantear una falsa oposición entre democracia real y democracia formal, que tanto ha costado en el pasado, los socialistas reclamamos el perfeccionamiento permanente de la democracia.

Reivindicamos en primer lugar la necesidad del acatamiento a las reglas del juego democrático: elecciones libres y regulares, derechos irrestrictos de reunión, asociación y difusión de ideas, separación de poderes, acatamiento de las decisiones de las mayorías pero también el máximo respeto a los derechos de las minorías.

Afirmamos que para los socialistas la democracia no es solamente un proceso de selección de personal. La democracia debe ser un proceso de incorporación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que hacen a la formulación de la política pública. Los ciudadanos organizados o no deben tener derecho a ser oídos en cada instancia en que se formulen políticas que los afectan.

Es sabido que los grupos de interés más poderosos tienen acceso a quienes toman las decisiones que los afectan, cuando no es que son ellos quienes toman sus decisiones y los representantes de los ciudadanos son en realidad representantes de los poderosos. Esto hace que muchas veces los procesos de toma de decisión en materia de política pública no sea transparente. Nuestra propuesta reclama igualdad de tratamiento a las propuestas de los distintos actores económicos y sociales y, fundamentalmente, transparencia. La falta de esta última es la responsable de las licitaciones mal hechas, de la corrupción, del amiguismo y de la legislación que solo favorece a los grupos más poderosos porque son los que tienen acceso privilegiado a aquellos que deciden por el bienestar colectivo. Recogemos de los más de 10 años de gobierno progresista la rica experiencia de transparencia en los procesos de consulta a grupos empresariales, vendedores ambulantes, vecinos organizados, cooperativas, etc. Reivindicamos la consulta abierta y transparente así como su reglamentación basada en un código de ética de la función pública.

El Acuerdo Social, entonces, no sólo debe ser un acuerdo en torno a objetivos. Debe ser también un acuerdo en torno a reglas de juego porque la gobernabilidad no solo hace a la sustancia de los reclamos sino también a la forma de su procesamiento.

Finalmente, es importante destacar que un acuerdo social no puede ser construido sobre la base de un listado de demandas sectoriales cuya sumatoria haga imposible su realización. Claramente, el gobierno progresista deberá fijar prioridades que son inalienables. En el marco de estas prioridades que hacen a un modelo de desarrollos alternativo es que se procesarán demandas y se crearán las nuevas reglas del juego para una gobernabilidad democrática de signo progresista. Un gobierno progresista no debe ni puede ser un gobierno que atienda meros intereses corporativos porque

los mismos nos pueden llevar a un juego suma cero en el cual todos pierdan o, peor aún, en el que se mantenga la lógica de los intereses del Bloque Conservador.

Tesis 4: La política como articuladora del proyecto progresista

Lo social y lo político

Los socialistas concebimos a la política como el espacio donde las sociedades van construyendo deliberadamente su futuro. Son las decisiones colectivas y democráticas las que van moldeando los grandes proyectos sociales. Precisamente, la toma de decisiones democráticas, que involucran al conjunto de la sociedad, se realizan en el ámbito de "lo político".

A su vez, entendemos a la política como una poderosa herramienta de articulación social.

Reivindicamos la noción republicana de la política como "vocación de servicio". No creemos que las cuestiones públicas deben quedar exclusivamente en manos de los gobernantes ni de la burocracia estatal.

La democratización del Estado pasa por una socialización de la "cosa pública" en el sentido de introducir un mayor equilibrio entre los mecanismos de democracia directa y la democracia representativa.

Se trata de profundizar el proceso histórico de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política a través de las instituciones republicanas.

El proceso de democratización del Estado implica un aumento de la acción ciudadana dentro de las estructuras estatales y a su vez, las organizaciones sociales deben aumentar su poder social como factor de contralor de las políticas estatales.

Sin una sociedad civil autónoma, libre y democrática no es posible avanzar hacia el control social (cogestión y autogestión) de los medios de producción y lograr la justicia social; asimismo, sin un Estado fuerte y democrático, la sociedad civil no podrá superar sus niveles de desigualdad.

El modelo neoliberal pretende restringir al máximo los espacios públicos de participación democrática pues entiende que el mercado es la más perfecta y eficiente instancia de decisión. Es allí donde los individuos, sometidos a la ley de la oferta y la demanda, satisfacen sus necesidades a través del consumo con un criterio de rentabilidad privada. Si hay individuos que no pueden acceder a niveles satisfactorios de consumo se los excluye y margina socialmente. Es así que se propugna construir un sujeto que se aparta de la "cosa pública" y se refugia en su propia individualidad. Se crea un ser individualista, egoísta y apático, nacido para consumir y que desprecie profundamente de todo proyecto colectivo.

Los grupos sociales se disuelven en el mercado diluyendo sus propios intereses de grupo.

Los socialistas consideramos a la economía y al mercado como un espacio de decisión social más pero no es el único, ni el más eficiente y mucho menos, el más democrático. No nos atamos a reducciones ni determinismos. En nuestro proyecto, el mercado sigue existiendo pero enmarcado dentro de una política de programación democrática, al servicio de la gente.

La programación democrática, función del conjunto de la sociedad, cuyos procedimientos y resoluciones se sintetizan en el estado, decidirá en cada caso cuánto habrá de mercado, cuánto de área estatal, o de área privada o autogestionada, como fruto de la voluntad de los ciudadanos, de la política y la democracia y no de las leyes del mercado.

Esta programación democrática articula y regula tres aspectos: Estado, Mercado y Sociedad. La dicotomía Estado-Mercado no agota toda la complejidad social. Existe un tercer sector de asociaciones y organizaciones sociales, de cooperativas y de gestión social que también debe tenerse en cuenta.

Los socialistas anteponemos la democracia sobre el mercado. Sin la acción correctora de la política desde los valores del socialismo y de la democracia, el mercado deja muchas capacidades individuales por desarrollar y muchas necesidades por cubrir, confundiendo valor y precio, así como derechos con mercancías.

Los derechos humanos fundamentales son, ante todo, derechos políticos fruto de un larguísimo proceso histórico de lucha por la dignidad del ser humano. Constituyen nuestra opción ética y son el fundamento y principio esencial de una sociedad democrática y socialista.

Discrepamos con el liberalismo filosófico de raíz naturalista que considera al individuo como una abstracción previa a la sociedad. y entenderlo como un producto de la misma, no nos impide afirmar el valor universal de los derechos humanos, en base a las dos consideraciones hechas precedentemente, porque son el resultado de la evolución de la humanidad y porque es nuestra opción ética y valorativa.

Los derechos socio-económicos y culturales o de "última generación" son también el resultado de la evolución histórica, pero su ejercicio debe estar regulado por la voluntad colectiva de la sociedad en su conjunto en un amplio ejercicio democrático.

Sindicatos, movimientos sociales y partidos.

Los socialistas siempre hemos rechazado la concepción de los sindicatos y demás organizaciones sociales como "correas de transmisión" de los partidos políticos.

Las organizaciones sociales en general y los sindicatos en particular, no son sólo instrumentos de lucha sino también espacios donde se va construyendo un consenso activo en la población.

Reivindicamos la autonomía de los sindicatos y los movimientos sociales como expresiones organizadas de la sociedad civil.

Los movimientos sociales, en tanto lo anteriormente expresado, constituyen la parte fundamental de los contrapesos al poder estatal. Sindicatos y movimientos sociales fuertes contribuyen decididamente a la construcción de un poderoso entramado social.

La izquierda y en particular nuestro Partido Socialista han estado vinculados históricamente a los movimientos sociales en general y al movimiento sindical en particular. Hemos sido gestores y defensores de la unidad de los trabajadores y de sus organizaciones. En el marco de la defensa de la autonomía del movimiento sindical hemos bregado por su funcionamiento democrático y eficaz junto con las diferentes corrientes ideológicas que conviven en el mismo. Asimismo nuestro Partido se ha nutrido de la rica experiencia del movimiento sindical con el cual nos sentimos hermanados.

Los socialistas seguiremos estando como trabajadores dentro del movimiento sindical construyendo desde la base las condiciones para el fortalecimiento del Bloque Popular Alternativo, sin renunciar a combatir fraternalmente los corporativismos y los perfilismos estériles que pretenden estigmatizar lo político partidario enfrentándolo con lo sindical sin comprender que ambas instancias contribuyen a la lucha por la

justicia social, cada una desde su especificidad y respetando la independencia de la otra.

El PS: de la oposición al Gobierno

Los socialistas debemos prepararnos para gobernar. Es una de las principales tareas de la presente coyuntura histórica. Tenemos que conocer a fondo la realidad del país y su gente, tener un panorama claro de la situación regional y mundial y así poder articular una propuesta de gobierno clara, concreta y viable que posibilite las grandes transformaciones que el Uruguay necesita y reclama.

Hemos aprendido mucho durante estos 11 años al frente del gobierno departamental de Montevideo; pero este solo hecho no es suficiente. El acceso al gobierno nacional implica una multiplicación y amplificación importante de los problemas que enfrentamos en el gobierno municipal y debemos estar listos para afrontar el desafío.

Esta transformación implica enfrentar ciertos peligros para la vida de nuestro Partido.

El PS, en la hipótesis de transformación en partido de Gobierno, no puede diluirse en la estructura gubernamental ya que la sociedad civil necesita un PS fuerte que pueda operar como articulador de la misma con el Estado. El modelo histórico del P. Colorado como "Gobierno en el Partido" es un modelo agotado y perimido que ya no responde a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Es el Partido el que debe marcar el rumbo del Gobierno y no a la inversa.

Bajo un gobierno progresista, intrínsecamente democrático y pluralista, deben aparecer como natural ciertas fricciones o contradicciones que se produzcan entre las organizaciones sociales de todo tipo y el Gobierno. Son en estas instancias donde aparece el rol articulador del partido político intermediando con la sociedad civil y como vertebrador de un gran acuerdo social con las más diversas fuerzas sociales del país y construyendo una profunda alianza social con las grandes mayorías nacionales dentro del bloque popular alternativo.

En síntesis, nuestra fuerza política debe cumplir un doble rol como ámbito de formación política y como canal de participación democrática

Tesis 5: Democracia sobre nuevas bases: 21 años después

Los 21 años transcurridos desde la formulación de nuestro proyecto de DSNB han ratificado la plena validez y vigencia del mismo. Ya constituye una seña de identidad de los socialistas.

DSNB es nuestra estrategia de aproximación en la construcción del socialismo y tiene como pilares fundamentales:

- a) el acceso al poder estatal a través de elecciones democráticas;
- b) construir el poder democrático y popular en la base de la sociedad civil en un proceso permanente; y
- c) la articulación del Estado y la Sociedad civil en el desarrollo societario.

La profundización de la democracia, la descentralización y la transferencia de poder a los ciudadanos, a las expresiones organizadas de la sociedad civil, a los poderes locales y a los municipios- queremos ciudades justas, seguras y habitables- conforman partes sustanciales de nuestra estrategia de Democracia Sobre Nuevas Bases.

Se trata de democratizar el Estado, democratizar la sociedad civil y articular ambas instancias.

La articulación Estado- Sociedad Civil se materializa con la participación de las organizaciones sociales involucradas en el diseño e implementación de las políticas sociales del Estado.

De esta manera se va diseñando el poder popular en el seno de la sociedad civil y su articulación con el poder Estatal antes y después del acceso al mismo; todo lo cual constituye el fundamento básico de nuestro proyecto de DSNB.

Desde hace ya muchos años, los socialistas concebimos a la construcción del poder como un proceso continuo, no como un acto único. Visualizamos este proceso como un proceso dialéctico, de avances y retrocesos; no como algo lineal.

Toda concepción se deriva de que entendemos que en nuestras sociedades complejas, el poder político no se halla concentrado en un solo ámbito o espacio - como sería el Estado para una lectura tradicional de la izquierda- sino que existe una multiplicidad de centros de poder distribuido en un complejo entramado social.

La Democracia sobre nuevas bases no es sólo procedimientos, es una idea moral, una preocupación por la justicia, un orden de convivencia, una civilización, una pasión cívica. Lo opuesto a la apatía y la resignación.

Todo este proceso de democratización, de DSNB, implica el desarrollo de una nueva hegemonía en la sociedad, no en el sentido de copamiento autoritario, sino de gestación de un nuevo consenso, de nuevos valores, de un nuevo sentido común.

Proceso que no se interrumpe porque se pierda el gobierno y que en rigor comienza aunque nunca se haya alcanzado el mismo, en la gestación de contrapoderes en la sociedad y en la lucha ideológica a través de la difusión de interpretaciones críticas de la realidad de valores distintos a los del sistema dominante.

El ciudadano y la ampliación de la ciudadanía

Para el modelo neoliberal, signado por la preponderancia absoluta del mercado, el consumidor es el sujeto social principal. Los factores económicos adquieren prevalencia sobre los demás como reguladores sociales y es de acuerdo a estos factores que se desenvuelven los individuos, intercambiando mercancías a fin de obtener mayores ganancias. Esta es la única realidad, la del mercado funcionando sin interferencias.

El neoliberalismo concibe a la política y a la democracia como una traba al funcionamiento del mercado y en definitiva, una restricción a la libertad negativa; es decir, que nada ni nadie debe interferir con la iniciativa individual en el mercado.

Para los neoliberales la democracia no es un valor en sí mismo sino tan sólo un instrumento generalmente distorsivo. Precisamente se quiere menos democracia y más mercado.

Los socialistas proponemos más democracia y mejor mercado.

Una democracia que amplie sus fronteras y enriquezca su interior a través de la participación activa de los ciudadanos y las expresiones organizadas de la sociedad civil. Una democracia institucional que sea, a la vez, una democracia cívica, estimulando las virtudes ciudadanas, abriendo nuevas fórmulas de cohesión y de realización personal, donde los ciudadanos y las organizaciones sociales encuentren los incentivos para ejercer sus responsabilidades colectivas. En ese contexto hay que explorar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la participación directa y consciente de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Es en este sentido que la política adquiere un rol decisivo y fundamental como espacio y herramienta de construcción de las condiciones de vida de los pueblos.

Y para nosotros, los socialistas, el ciudadano el sujeto principal de la acción política.

La ciudadanía es el pilar fundamental sobre el que se asienta la democracia política.

A su vez, debemos ensanchar la gama de libertades y derechos democráticos de que goza actualmente el ciudadano. Propugnamos la consagración de derechos que no están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, como ser los derechos relativos a la intimidad o la privacidad o el "habeas data" (derecho a la información) tan importante en las complejas sociedades modernas donde el conocimiento juega un rol preponderante, la creación del Defensor del Pueblo, etc.

Hay que arbitrar mecanismos institucionales para que los ciudadanos puedan hacer llegar sus opiniones sobre los asuntos públicos de su interés, transparencia en los procesos de toma de decisiones y controles externos independientes.

También se trata de expandir la ciudadanía al campo económico, democratizando la sociedad civil y articulándola con el Estado.

Esto implica ampliar las fronteras de la democracia y la ciudadanía, promoviendo la participación de los ciudadanos y llevando los principios de la igualdad y la responsabilidad a la vida cotidiana.

Así, por ejemplo, luchamos por el establecimiento de sistemas de cogestión de los trabajadores en la dirección de las empresas, para ir avanzando progresivamente a sistemas de autogestión, la creación del Consejo de Economía Nacional previsto en nuestra Constitución y que nunca se ha implementado, etc.

En último análisis, el ejercicio de la ciudadanía se logra fortalecer con la politización al máximo de la sociedad civil y la democratización del Estado.

El papel de la educación como instrumento para la profundización de la democracia y afirmación de la ciudadanía

Una Educación para la democracia, para la ciudadanía y para la vida; para una vida consciente, solidaria y participativa.

Una Educación que promueva la adquisición, actualización y utilización de los conocimientos y de las habilidades y que se desarrolle toda la vida.

Una Educación nacional que se construya:

- * Mediante un amplio debate público a efectos de alcanzar consensos prestados democráticamente.
- * Atendiendo a todo el sistema educativo: desde pre-escolares hasta post-universitarios, tanto en lo público como en lo privado, en lo formal y en lo no formal, etc.
- * Respetando los principios de inclusión, totalidad, articulación continuidad, gestión democrática funcionalidad y tradición.
- * Fortaleciendo la Educación Primaria , transformando la Educación Media en el gran eje articulador entre Educación Primaria y Educación Superior y, a esta última en destino común para todos los uruguayos

Tesis 6: Gobiernos Departamentales, Gobiernos Locales y Descentralización

La concreción de DSNB y la Descentralización como objetivo político

La reflexión teórica que se plasmó en DSNB operó como racionalización de la experiencia vivida durante la dictadura militar, en donde un nuevo modelo de sociedad se estaba gestando. Las cooperativas, fundamentalmente las de vivienda, las ollas populares, las policlínicas barriales, los movimientos de consumidores, los grupos de mujeres, los movimientos vecinales, se convertían en espacios desde los cuales se resistía a la dictadura, se apuntaba a satisfacer o atender necesidades básicas de la población, superando, desde la autogestión y la solidaridad, la mercantilización y prescindencia que se pregonaba desde el poder del Estado. Se difundían otras pautas de vida y valores que se oponían al individualismo utilitarista; en suma, se creaba en ellos Poder.

Se llegaba así a una concepción más rica y articulada del Poder. El poder no se ocupa en un día, se construye en el día a día. Todas las clases o fuerzas sociales tienen su cuota de poder. En el Estado se condensan y articulan los mismos con un sentido de dirección o hegemonía de clase. De ahí surgía una estrategia que apuntaba a lograr al mismo tiempo que el acceso al gobierno por parte de los sectores populares, el desarrollo de las capacidades de los actores de la sociedad civil. La Descentralización se ubica en justamente en este punto de la articulación del estado y la sociedad civil.

Con la propuesta de DSNB, cuyo documento final es elaborado a principios de 1984; el Partido Socialista se presenta a la ciudadanía en el año electoral. Pero más allá de la propuesta electoral, DSNB significó la primera y más articulada concepción renovadora de la izquierda uruguaya, superando a las concepciones estatistas de la izquierda tradicional, con una fuerte apuesta a una sociedad civil socialista, construyendo un nuevo concepto de ciudadanía.

En el programa del FA para el Gobierno de Montevideo, presentado en las elecciones de 1989 y en la labor consiguiente del compañero Tabaré Vázquez con su equipo de gobierno y con el decidido y fuerte involucramiento de la bancada de la Junta Departamental la descentralización será uno de los ejes fundamentales.-

La Descentralización y la Reforma del Estado se constituyen en ideas rectoras para la constitución de un gobierno democrático y progresista de mayorías nacionales.

Es obvio que los socialistas no concebimos la descentralización como un mero problema administrativo, sino como un problema estratégico desde el punto de vista económico, social y político. El desarrollo equilibrado del país es condición para que exista una efectiva igualdad entre las regiones que lo componen.

En la actualidad, la mayor parte del poderío económico y la capacidad de decisiones políticas están concentradas en Montevideo. Por lo menos, la mitad de la población, la que vive en el resto del país, no participa regularmente de los posibles beneficios del crecimiento económico (fuentes de empleo, desarrollo de infraestructuras, urbanización, etc., salvo escasas experiencias regionales y referidas fundamentalmente a los centros turísticos con cierta incidencia regional) ni es protagonista de los capítulos principales de ese crecimiento.

La descentralización política y la descentralización administrativa del país, están indisolublemente ligadas a la descentralización y autonomía en materia económica, y ella debe continuar más allá de las capitales departamentales. Es necesario posibilitar que el trabajo y el crecimiento productivo y económico, se queden donde se genera y se extrae la riqueza. Es necesario que se promueva y apunte la capacidad regional de generar crecimiento económico así como la capacidad de tomar decisiones políticas. Un desarrollo equilibrado del país, posibilitará el crecimiento de la capacidad productiva global de la sociedad.-

Gobiernos Departamentales y Gobiernos Locales

En nuestra estrategia, el objetivo de desarrollo y consolidación de los espacios

regionales y locales resulta esencial para el cambio. Este desarrollo y consolidación, que será un proceso en ascenso, sólo puede darse en la medida que el Gobierno central, a través de la elaboración de un Presupuesto Nacional bien articulado (con elaboración participativa), oriente la inversión pública y el estímulo crediticio a la concreción de polos productivos regionales que reviertan la tendencia del interior hacia la inoperancia productiva y los contemple como regiones productivas adecuadas a sus características propias y a las particularidades del mercado nacional e internacional.

Por estos motivos, la planificación territorial que identifique áreas homogéneas susceptibles de re-regionalización y desarrollo de proyectos productivos a nivel local, regional y del Mercosur es central en un modelo de desarrollo alternativo.

Este desarrollo y consolidación se torna fundamental para la viabilidad económica y el cambio en equidad de toda la sociedad porque ésta sólo puede darse en el marco global actual y futuro, si se multiplican los factores de integración regional, particularmente con Brasil y Argentina. Desde esa óptica, las regiones fronterizas están llamadas a jugar un rol fundamental en la medida que su desarrollo favorece la transformación de fronteras "defensivas" como han subsistido hasta ahora, a fronteras integradoras, desde una posición de fortaleza económica y productiva. Sin dudas que esa estrategia es la única que puede desarrollar una descentralización efectiva, en la medida que favorece a mediano y largo plazo, la autonomía regional y la reproducción económica, con su consecuente efecto multiplicador sobre la sociedad.

En esa perspectiva los gobiernos departamentales y los gobiernos locales cumplirán un papel ascendente fundamental, en la medida que articularán las particularidades regionales y locales con los intereses generales de la Nación, desde una posición de mayor acercamiento a la sociedad y en un marco de participación creciente. La organización multisectorial que privilegia los problemas concretos y cercanos, reconoce lo local como referencia: el territorio es una red de relaciones donde es posible lograr nuevos actores para el cambio y sobre todo da mayor factibilidad a la concreción de las propuestas populares. En el esfuerzo de planificación y sus consecuentes priorizaciones, que en primera instancia se concretarán en la elaboración participativa de los presupuestos locales y regionales, se trabaja con un lenguaje de mayor concreción como resultado justamente de la prioridad que se le da a los problemas específicos que atraviesan distintos sectores de la población y que cuentan con diagnósticos y propuestas que los diferentes actores realizan colectivamente. Se evita así la planificación "promedio" que no sirve a nadie, o a la tecnocrática que se aleja de la realidad pero que además no genera participación autónoma. Se favorece además una racionalización de los recursos humanos y materiales que apuestan a una más justa y coherente previsión presupuestal.

La descentralización del poder debemos realizarla desde el punto de vista administrativo, social, económico. Eso no debe implicar desestructurar las identidades locales, sino lo contrario. Esto permitiría unidades menores, que en cada plano conceptual concreten la regionalización que resguarde la identidad local, en una identidad regional, que trasvase las divisiones administrativas. Descentralización no es dividir sino encontrar las formas de regionalizar las identidades existentes.

La propuesta de descentralización se apoya fundamentalmente en la participación como elemento clave que asegura la profundización de la democracia. La construcción de una nueva ciudadanía implica el ejercicio de los derechos y deberes; porque habilita un escenario social y político donde el ciudadano cumple un papel activo y lo recrea como actor permanente.

El concepto de construcción de ciudadanía, herramienta fundamental para precisar cómo se involucra la población en la participación, pasa por revertir la idealización y aún la ideologización en el sentido de la falta conciencia de la participación. En primera instancia es necesario partir de la cultura de la pasividad, de la lógica de "ajenidad", que el ciudadano tiene con la cosa pública.

Es falso el presupuesto que el vecino no participaba porque no lo dejaban. No lo dejaban pero además no lo demandaba. La cultura tradicional ubica al ciudadano en una postura de "receptor", de "espectador" más que de protagonista. Para eso se le ha educado desde los distintos ámbitos de la sociedad. A lo que se agrega que dentro de la tradicional relación entre la Sociedad Civil y el Estado, ésta se articula sobre la demanda que alimenta el clientelismo político. Tampoco es posible desvincularse del contexto de descreimiento, individualismo, crisis de asociación, etc. que marcan la coyuntura e inciden lógicamente en el proceso.

Toda esta realidad fue la que operó como punto de partida en el proceso de Descentralización iniciado por la IMM a partir del Gobierno del FA.

Montevideo y el proceso de Descentralización

El proyecto - proceso de Descentralización ha pasado, en estos once (11) años a formar parte del paisaje político montevideano y a constituirse en una de las principales señas de identidad del Gobierno del EP-FA. Son indiscutibles los profundos y valiosos cambios que se han producido y los avances en el proceso de profundización de la democracia en el sentido no solo de la participación de los vecinos, sino también en el rol que han jugado en el diseño de un programa de intervenciones ciudadanas más justas y racionales; no obstante en la actualidad, el proyecto descentralizador desarrollado por la IMM enfrenta una "prueba de fuego" ante el contexto recesivo profundo que atraviesa nuestra economía. Sin embargo el máximo desarrollo del proceso debe darse en la situación de crisis aunque se debe reconocer que se ha llegado a un punto donde se debe corregir y actualizar la descentralización para recuperar y multiplicar su accionar

Resulta entonces un momento de inflexión para la descentralización, la cual se encuentra en un nivel que puede constituir la base de su relanzamiento o el inicio de una declinación más o menos acelerada.

Lo que se plantea con fuerza, en este tiempo político, es o bien seguir en esta dinámica en la cual el ciudadano acepta la Descentralización sin involucrarse, con lo cual se profundizaría el escepticismo y la apatía, o bien introducir cambios que reposicionen a la descentralización como el eje político fundamental del nuevo relacionamiento entre el sistema político y la sociedad civil, que abra un horizonte de expectativas y esperanzas ciudadanas, convirtiéndose además en una herramienta que nos permitirá identificar áreas y regiones en todo el país, con potencial de desarrollo local y que hoy se encuentran desatendidas y marginadas por las políticas centralistas y neoliberales impulsadas por los gobiernos de las últimas décadas.

La Descentralización se constituye en un instrumento válido para la construcción de un nuevo proyecto nacional de país al inicio del siglo XXI.

No debemos olvidar que cuando hablamos de Descentralización, también estamos hablando del poder y de su distribución dentro del Estado y el sistema político, con la participación de la sociedad civil y sus organizaciones sociales, construyendo nuevos espacios colectivos de articulación social y política.

Se trata de una lucha por construir otra cultura política; pasar de una cultura y ejercicio del poder individual, a una cultura colectiva con vocación de servicio; a un ejercicio de liderazgo compartido, a una transformación cada vez más democrática del poder.

Pero nuestra propuesta no se agota en el tema del poder; también reconocemos como nuestro patrimonio la lucha por la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos públicos. Pero la eficiencia y la eficacia no se limitan a la reducción del gasto público y mucho menos implica que esto se haga a través de recortes presupuestarios a políticas sociales tan vitales como la salud, la educación, la vivienda popular y la seguridad social.

Mecanismos e instrumentos institucionales para los cambios en la Descentralización a nivel nacional

La transformación del actual modelo descentralizado de Montevideo y el planteo de la instrumentación de la descentralización para el resto del país puede ser instrumentada de diversas maneras. En ese sentido, pueden haber distintos tipos de modificaciones a introducir los cuales requerirán también diferentes ámbitos institucionales y niveles de voluntad política para su implementación.

Hoy por hoy se cuenta con instrumentos de modificaciones a través de:

- 1) La sola voluntad de los Intendentes
- 2) Modificaciones por voluntad e iniciativa del Intendente con la anuencia de la Junta Departamental.

En los incisos del artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal 9.515 del 28 de octubre de 1935, se precisan las competencias y posibilidades de descentralización, pero que no se practican por parte de los Intendentes; éstos al amparo de la Ley citada y con la anuencia de la Junta Departamental, pueden entregar y delegar competencias muy importantes. Si esto no se lleva a cabo es por falta de voluntad política y también por las debilidades y relaciones de dependencia que tienen las Juntas Locales Designadas.

Uno de los motivos de que no se utilicen los medios legales ya estatuidos, tiene que ver con lo que más arriba explicitamos con respecto a la transformación de los espacios de poder y capacidad de decisión de la sociedad civil, por ello entendemos que es el momento de reivindicar el carácter electivo de todos los Gobiernos Locales del país.

Para que los Gobiernos Locales sean electivos o, como se describen en la Ley Orgánica Municipal, las Juntas Locales, se precisa de una Ley Nacional o una Reforma Constitucional

Se hace necesario entonces, evaluar las dos alternativas, su posibilidad de concreción y el escenario político adecuado para llevarlas adelante.

a) Alternativa Ley Nacional: en 1994 la Administración Vázquez envió al Parlamento un Proyecto de Ley que fue aprobado por la Junta Departamental de Montevideo, tendiente a que las Juntas Locales fueran declaradas electivas a partir de las elecciones nacionales.

Este proyecto no fue sancionado ni considerado por el Parlamento. En 1995, la Administración Arana, vuelve a introducir el mismo proyecto y nuevamente pasa desapercibido por el Parlamento.

Importa recordar que la propuesta de electividad de las Juntas Locales forma parte de los programas electorales del FA de 1994 y 1999. Ambos proyectos no tuvieron repercusión política. La derecha se opone y silencia su oposición y en el EP-FA el tema tiene bajo perfil.

En la Comisión Parlamentaria, que trata la instrumentación de las leyes que reglamentan la Descentralización, la derecha no presenta proyecto alguno. Solo se presenta en 1998 un proyecto del Nuevo Espacio y otro del EP-FA, presentado por el Cro. Diputado Roque Arregui.

Más allá de las actitudes predecibles de la derecha, importa hacer transparente la conducta de las fuerzas encuentristas. Es imprescindible que las posturas en torno a este tema se hagan explícitas, para evitar toda posible mala percepción por parte de los ciudadanos frentistas y encuentristas, los votantes de los otros partidos y la ciudadanía en general.

Esta definición, tendrá que ver con la propuesta y las estrategias que se diseñen para alcanzar la electividad y tendrá que ver también con la voluntad y la energía política que se deberemos poner en el futuro inmediato, cuando termine el actual período de balance, reflexión y propuestas.

En el contexto del actual debate político (o por lo menos en el discurso) el Partido Nacional está comprometido con la descentralización. Fue una de sus cartas de negociación para acompañar la reforma constitucional en 1996. Si esto es así, importa que el EP-FA tenga una propuesta definida y viable.

b) Alternativa de una Ley de Reforma Constitucional: si el camino del Proyecto de Ley, se encontrara políticamente obstruido por la manifiesta falta de voluntad de la derecha, la otra alternativa a evaluar es la introducción de una enmienda o Reforma Constitucional, referida a la elección de autoridades locales, a través de Artículo 331 de la Constitución.

Deberemos pues definir en el próximo tiempo cuál es la mejor perspectiva para los cambios institucionales al modelo que se defina instrumentar, en acuerdo con las demás fuerzas políticas del EP-FA.

Ello implicaría potenciar un gran debate nacional en Montevideo y en todo el país sobre la descentralización y por ende sobre la reforma del Estado, el sistema político y la democracia. A través de "cabildos", "seminarios", "talleres", se recabarían insumos que aporten a definir las características del proyecto de reforma, involucrando a todos los actores políticos y sociales, principalmente los locales.

En fin de lo que se trata es de romper con el desaliento; desarrollar propuestas que nos pongan a la ofensiva política e ideológica, al tiempo de prefigurar nuestro proyecto de país que responda a las necesidades, expectativas y esperanzas de nuestra gente.

Todo esto significará un reto para el sistema político, que hasta ahora centró su accionar en la problemática global.

Sin descuidar esta esfera central y sin caer tampoco en las tentaciones recentralizadoras, garantizando la especificidad de lo local, debemos encarar ese desafío con la convicción de que por aquí pasa mucho del esfuerzo a aplicar para construir una sociedad socialista y por tanto, profundamente democrática.

Tesis 7: El Partido Socialista: Un Partido de socialistas

El Partido Socialista del Uruguay, fundado hace noventa años ha forjado en el país una legión de ciudadanos cuya voluntad de servicio al bien común ha permitido que sus señas de identidad calaran profundamente en los valores que caracterizan a los uruguayos. Nos organizamos como Partido Político, conscientes de que los cambios que nos proponemos llevar adelante para crear una sociedad "de personas libres, iguales y solidarias" solo podrán realizarse en la medida en que las mayorías democráticas expresadas hoy en el Encuentro Progresista/ Frente Amplio, conquisten el gobierno y construyan desde él su poder político.

Por ello nos definimos como un Partido democrático, revolucionario, pluralista, autogestionario y antiimperialista. Nuestros compañeros participan en la cotidiana batalla social, en el campo sindical, gremial, cooperativo, con el objetivo de contribuir a "cambiar la vida día a día", pero somos conscientes que para ganar el poder

político es preciso conquistar los mecanismos de gobierno que permitan ejercerlo. Y ello solo se logra a través de una organización política co-partidaria que impulse la lucha política, defina objetivos programáticos, articule las alianzas necesarias para conformar mayorías y planee la acción.

Nuestro Partido sostiene "que el triunfo de las ideas socialistas sólo será posible si ellas consiguen arraigar en las mayorías ciudadanas". Por ello queremos conseguir el gobierno por la voluntad libremente expresada por los ciudadanos. Hemos expresado asimismo que el pluralismo democrático implica respetar la libre expresión y organización política y en consecuencia la alternancia en el gobierno. La regla fundamental del sistema democrático es respetar, en todas las circunstancias, la voluntad soberana de la ciudadanía.

Somos una organización política de la clase trabajadora, que defiende los intereses de ella y la de todos aquellos que se le unan para avanzar hacia una sociedad sin clases, eliminando la explotación económica, la opresión política y la discriminación de cualquier signo que exista.

En consecuencia de estos objetivos, el propio Partido debe constituirse, por las reglas que determinen su funcionamiento, pero también por los valores en los que eduque a sus militantes, en la preconfiguración de la sociedad que deseamos construir. En tal sentido, los mecanismos de decisión serán en el Partido rigurosamente democráticos, respetándose las instancias de deliberación y de decisión, así como la libertad de todos a expresarse.

El Partido adopta reglas de funcionamiento y el acatamiento a ellas no constituye sino un elemento que garantice que es el colectivo quien elabora ideas, programa de acción, define el programa y la propuesta. Toda acción que viole los mecanismos de funcionamiento no solo perjudica la relación de todos con todos, sino que conspira contra el triunfo del proyecto socialista.

Los valores que cultivamos los socialistas, como libertad, solidaridad y justicia social no serán posibles de consolidar sin la plena vigencia de los derechos humanos. Así como sabemos que no existe justicia ni libertad, sin lealtad política y humana, sin una permanente búsqueda de la verdad que como se ha señalado, aunque resulta a veces dolorosa, "es siempre revolucionaria".

Y precisamente para constituir los socialistas un nucleamiento profundamente imbuido de comportamientos solidarios, hacemos de la honradez un factor fundamental para vivir la cotidianeidad pero también para cimentar un nuevo tipo de relación entre los seres humanos que erradique la hipocresía y el cinismo de la convivencia en la sociedad de lobos que es el capitalismo.

Los socialistas nos organizamos para lograr construir una nueva sociedad. Nos realizamos como seres humanos en medida que luchamos por ese objetivo. Nuestro propósito no consiste en medrar sobre los demás sino actuar cada día sirviendo a nuestros semejantes. No creemos ni en la violencia ni en las trampas.

Tesis 8 : Espacio 90, Frente Amplio, Encuentro Progresista

Situación política emergente de las elecciones 1999-2000.

Las cuatro elecciones desarrolladas durante el período de poco más de un año que va desde abril de 1999 a mayo de 2000, emergentes de la reforma constitucional de 1997, dieron como resultado un nuevo mapa político en el país.

La elección realizada en abril de 1999 determinó básicamente el panorama interno de cada uno de los 4 lemas que a posteriori obtendrían representación parlamentaria, pero en especial determinó el candidato único a la presidencia de cada uno de ellos.

Las tres restantes elecciones, las nacionales de octubre de 1999, el balotaje de noviembre del mismo año y las municipales de mayo de 2000, determinaron por el período de los 5 años siguientes, la Presidencia de la República, la composición de las cámaras legislativas y, los 19 gobiernos departamentales de que se compone la estructura del Estado uruguayo.

Resultado Electoral

Como consecuencia de dicho proceso electoral, el Encuentro progresista se convirtió en la primera fuerza política del país con un respaldo del 40,1% del electorado y, consecuencia, con una representación porcentualmente igual en cada una de las cámaras que componen el Parlamento Nacional.

El triunfo en el balotaje del Dr. Jorge Batlle y las "coincidencias" o acuerdos logrados por los partidos tradicionales antes y después de dicha elección, dieron como resultado la conformación de una coalición que cuenta con las mayorías parlamentarias (56%) necesarias para respaldar los proyectos de gobierno. Por su lado el Nuevo Espacio cuenta con el 4% de representación en el Parlamento y ha tenido, en los temas fundamentales, un comportamiento similar al del EP/FA.

El panorama se completó en mayo de 2000 con un reacomodamiento parcial del sistema político ya que, el Partido Nacional ganó 13 de las 18 intendencias del interior del país, el Partido Colorado obtuvo solo 5 y, el Encuentro Progresista retuvo por muy amplio margen (cerca del 60%) el gobierno de la capital.

Gobierno y oposición

Estos resultados colocan a nuestra fuerza política en un papel de oposición al gobierno del Presidente Jorge Batlle, respaldado por la coalición de blancos y colorados. Ello se explica por dos razones esenciales:

La primera es debida a la voluntad soberana de la ciudadanía. En efecto, en el balotaje de noviembre quedó claro que sólo se decidía entre dos candidatos (Jorge Batlle y Tabaré Vázquez) sino que la gente optaba por dos proyectos de país, uno conservador y continuista y el otro progresista y de cambio. Fue la gente la que decidió nuestro papel opositor.

La segunda razón tiene que ver con el ejercicio del gobierno ya que, a pesar de hacer gala de un estilo propio y diferente al gobierno anterior, se mantiene la vigencia de un modelo económico que ha sumido al país, a sus sectores productivos pero fundamentalmente al grueso de la población, en una profunda crisis. En una crisis económica derivada de la ausencia total de competitividad externa y de rentabilidad interna, una crisis de producción que en su tercer año consecutivo está destruyendo gran parte del aparato productivo del país, y una crisis social derivada del desempleo y la marginación.

Ofensiva Conservadora

Luego de un crítico año 2000 en donde se agudizó la recesión económica y productiva, y quizás aprovechando dicha coyuntura, el gobierno ha decidido claramente apurar las llamadas reformas estructurales de la economía y la sociedad. Ello tiene básicamente dos grandes objetivos:

El primero, es modificar la estructura y el funcionamiento del Estado transfiriendo parte importante de su patrimonio y/o actividades hacia el sector privado utilizando muy diversos mecanismos como la venta de activos, subasta de acciones de

Empresas Mixtas, concesiones, asociaciones, desmonopolizaciones, etc. Especialmente respecto a las Empresas públicas, se plantean mecanismos de competencia con el sector privado, desmonopolización, sin que previamente se haya tenido políticas de fortalecimiento para prepararlas para esa competencia pero además y sobre todo, manteniendo un tratamiento diferenciado y discriminatorio hacia la empresa pública respecto a la privada como por ejemplo la inmovilización de los encajes del BROU, el impuesto a la compra de moneda extranjera o el pago de mayor porcentaje de aportes patronales a la Seguridad Social.

El segundo, es acentuar aún más la desregulación de las relaciones dentro del sector privado, especialmente en lo atinente al mercado laboral, a los efectos de que sea el "libre juego del Mercado" el que determine las relaciones de poder y de la competencia. Al decir de José Pedro Cardoso parafraseando a Vivian Trías, "es la libertad del zorro en el gallinero", sobre todo en esta aguda situación de desempleo y recesión económica en donde las empresas grandes (generalmente multinacionales) se comen a las chicas (mayoritariamente de capitales nacionales) y en donde se imponen salarios de subsistencia a la mayoría de los trabajadores.

La estrategia progresista

La estrategia definida por el IV Congreso del Frente Amplio realizado en setiembre de 2001 es adecuada para ganar las elecciones del 2004 y para gobernar a partir del 2005. La misma consiste en dar principalidad a dos ejes de acción política: Uno, el aislamiento tanto social (principalmente) como político, de la política económica del gobierno. Ello se viabiliza básicamente en seguir impulsando, profundizando y difundiendo el "Plan de emergencia" con medidas destinadas a atender tanto la emergencia productiva como la crítica situación social derivada del desempleo y la marginación; y promoviendo se conforme una instancia de diálogo intersocial para coordinar acciones y buscar el acuerdo sobre un conjunto básico de medidas que tengan por objeto "el cambio de la P. Económica".

Dos, detener la enajenación o transferencia del Patrimonio Nacional y defensa en general de las Empresas Públicas. En esta etapa ello se manifiesta básicamente por la recolección de firmas para habilitar el referéndum contra la venta de ANTEL en la medida que se ha convertido prácticamente en la única oportunidad de detener la ofensiva privatizadora y desmonopolizadora del gobierno. Este punto va acompañado de una propuesta global de Reforma del Estado que dote de eficacia administrativa y de eficiencia su funcionamiento, a los efectos de ser instrumentada en los primeros años de gobierno. Al mismo tiempo ya se han presentado propuestas sobre el funcionamiento y la transformación de las principales Empresas Públicas.

Los objetivos de mediano y largo plazo

El Uruguay contó durante la primera mitad del siglo XX con el predominio social y político de un verdadero proyecto nacional de país, el proyecto batllista. Dicho proyecto prosperó a partir de un estado de desarrollo de las fuerzas productivas amparado en condiciones externas e internas muy favorables que hoy han cambiado totalmente.

En la segunda mitad del siglo anterior, pero especialmente en el último tercio y hasta el presente, la derecha gobernante ha desarrollado una estrategia basada en los "datos" que recibe desde el exterior, prescindiendo absolutamente de la "viabilidad" de un proyecto nacional de país insertado en la región y en el mundo contemporáneo. Ha predominado sin duda en dicho antiproyecto, una traducción mecánica y determinista de las macro tendencias ideológicas existentes a nivel internacional, las que carecen totalmente de cualquier tipo de anclaje de carácter nacional.

En los últimos tiempos "el talenteo" de algunos de los más conspicuos exponentes del pensamiento de la derecha, no han reparado en identificar como paradigmas a "nuevos tigres" que sustituyan la inexistencia de un proyecto viable de país; y a tal

fin, le es indiferente reivindicar la experiencia neozelandesa, la irlandesa, etc. Algo así como si la aplicación acrítica de "la receta" produjera, por su sola existencia, mágicos resultados de prosperidad económica que volvieran viable al Uruguay.

El rescate de un proyecto nacional para el siglo XXI

El Proyecto Progresista consiste en rescatar al Uruguay como nación: con su gente, con su territorio, con su economía y con su cultura. Y los proyectos nacionales no se edifican en el corto plazo, son de largo aliento y sólo pueden construirse a partir de sólidos consensos de carácter social y político.

Sin embargo no se trata de restaurar "la tática del Plata" ni de la reconstrucción nostálgica del "Estado del Bienestar" del siglo pasado; se trata de definir y defender el interés nacional de un país actual, integrado a una región más amplia y a un mundo globalizado, tecnificado e informatizado.

Un proyecto viable de país, un proyecto nacional, hoy sólo es posible por medio de la integración regional y, a través de ella, una integración al mundo global. Pero dicho concepto va más allá de la simple "integración económica", abarca aspectos sociales, laborales, comunicacionales, culturales y, porqué no, políticos.

Además del fracaso notorio del "modelo conservador" llevado adelante por la derecha en varios países de la región, especialmente en Argentina y Uruguay; hoy en nuestro país, sólo la izquierda y los sectores progresistas pueden edificar un proyecto nacional que rescate los valores, la cultura, la historia y el orgullo de ser uruguayos. Solo la izquierda está en condiciones de restablecer el más amplio diálogo con el conjunto de la sociedad, con los agentes económicos y del trabajo. Pero esa construcción del Uruguay del siglo XXI va mucho más allá de lograr los acuerdos básicos que permitan "administrar" el poder durante un corto período, se trata de lograr consensos más estables y duraderos que permitan afianzar un proyecto de crecimiento económico y de desarrollo, humano, sustentable y con justicia social.

Ganar el gobierno nacional

Construir el proyecto nacional de los uruguayos para el siglo XXI es una tarea que tiene múltiples facetas, pero inexorablemente debe transcurrir por el acceso al gobierno, por ganar la Presidencia de la República y tener los respaldos sociales, políticos, electorales y parlamentarios suficientes que posibiliten la realización de los cambios que el país y su gente necesitan.

Construir un proyecto nacional pasa además por tener políticas para defender los intereses nacionales y, las políticas, se realizan necesariamente desde el ámbito público. Por eso es necesario mejorar el funcionamiento y el papel del Estado como agente de las políticas públicas, pero para eso es necesario mantener el patrimonio de sus empresas y retomar y no "desertar" de papel regulador de la actividad privada en su conjunto, especialmente en materia económica y laboral.

La construcción de una nueva mayoría

Partiendo de los resultados electorales descriptos en el primer punto de esta tesis será necesario, partiendo de los respaldos que hoy tenemos, construir las mayorías que en el plano electoral nos permitan ganar las elecciones nacionales de 2004 y en el plano político y social, posibiliten realizar los cambios que el proyecto nacional y progresista requiere.

Ganar y gobernar

Por eso desde nuestro análisis no alcanza con ganar las elecciones, sino que es imprescindible al mismo tiempo construir desde ya las mayorías nacionales que respalden las transformaciones que encare el gobierno progresista. Esas mayorías se construyen a través de acuerdos programáticos positivos, a través de encontrar los

puntos de acuerdo sobre las políticas que se deben implementar desde el gobierno.

Nuestro punto de partida es el profundo convencimiento de que la aplicación durante varias décadas del modelo económico que hoy nos rige, es la causa fundamental de la crisis que afecta a la absoluta mayoría de los uruguayos. Que sólo tuvo algún período de bonanza, pero manteniendo las injusticias y privilegios para escasos sectores minoritarios de la población, durante la vigencia de condiciones externas excepcionales para nuestro país (desde 1990 a 1998 inclusive), condiciones que difícilmente se puedan repetir. El profundo convencimiento además, que todos los sectores de actividad verdaderamente comprometidos con el interés nacional han sido literalmente excluidos por este modelo y hoy sufren las consecuencias de la dura crisis existente, sin otra perspectiva que la de cambiar radicalmente las políticas económicas o la profundización de su marginación y su desaparición económica.

Mayorías sociales y mayorías políticas

Sin embargo los consensos mayoritarios de los que hablamos no se construyen solamente a través de acuerdos que se forjan en las mesas de diálogo. Se construyen todos los días, en la acción cotidiana de las organizaciones sindicales, empresariales y aquellas que se forjan en la sociedad civil. En el movimiento cooperativo particularmente en el de vivienda, en el movimiento por el trabajo, en el movimiento de trabajadores y empresarios rurales que no sólo defienden sus intereses sino que defienden un modo de vida que en el mundo entero se trata de preservar porque si desaparece será difícil y casi imposible su recomposición.

Es amalgamando ese conjunto de intereses muchas veces contrapuestos y aquellas luchas, que se van forjando las mayorías necesarias para el cambio. Es necesario que desde la sociedad civil, a través de la participación ciudadana en tan diferentes y creativas expresiones colectivas como las mencionadas a título de ejemplo, se vaya consolidando la descentralización efectiva del poder en sus aspectos económicos, sociales y políticos.

Pero sin mayorías políticas y electorales que aseguren un sólido respaldo para llevar adelante el proyecto alternativo al vigente, los cambios aunque necesarios no serán posibles. Las mayorías o los consensos sociales que no se traducen en resultados electorales que cambien los partidos que gobiernan, no son mayorías reales. Sólo con el cambio de gobierno será posible cambiar las políticas económicas y sociales.

Votar juntos quienes piensan igual

Desde su creación, el Frente Amplio primero y luego el Encuentro Progresista, han tenido claro que para enfrentar al modelo vigente, a poderosos intereses económicos y, derrotar a viejos partidos hegemónicos por la derecha, vinculados internacionalmente y acostumbrados al poder; era necesario unir a todas las fuerzas posibles.

Las reglas electorales algunas veces pueden ser usadas para tratar de "perpetuar" un estado de cosas, el mantenimiento de determinados partidos en el poder. Pero son la democracia y las reglas electorales quienes nos han permitido con ingenio, encontrar la forma de "votar juntos" a quienes pensamos igual. Lo hemos hecho en el pasado, es imprescindible lograrlo para el futuro. Y ello será la base para asegurar al próximo gobierno progresista las mayorías políticas y parlamentarias.

Crecimiento del Encuentro Progresista - Frente Amplio

Además de lo expuesto en el punto anterior es necesario que nuestra fuerza política, el Encuentro Progresista - Frente Amplio, mantenga su política de contacto con la sociedad y la gente a los efectos de afianzar aún más su crecimiento. Además del aislamiento de la política económica del gobierno y el diálogo con los principales agentes económicos y sociales, además de la defensa del patrimonio y las empresas del Estado, es imprescindible mantener las recorridas pueblo por pueblo y barrio por

barrio durante la etapa inter-electoral dándole vida permanente al contacto y diálogo directo con la gente que, a la postre, son el objetivo esencial de un proyecto nacional de contenido progresista.

Los tres escenarios

El crecimiento debe cimentarse en el sólido análisis de la realidad social, política y económica por la que atraviesa el país y la cual hemos descrito someramente. Debe basarse también en un análisis pormenorizado de la realidad de cada rincón, cada barrio, cada ciudad, cada departamento. Una constatación incontrovertible de la realidad política de los últimos tiempos, agudizada desde la aprobación de la reforma electoral, es la importancia de lo local, de la solución de las necesidades más cotidianas de la gente, de lo determinante que resulta para ello la vinculación directa de la realidad social con el poder.

Sin embargo a los efectos del análisis para determinar políticas de crecimiento político y electoral de nuestra fuerza, es conveniente esquematizar en tres escenarios diferentes e importantes: Montevideo, Canelones y el resto del Interior. Es necesario analizar nuestra realidad pero también la "potencialidad" para nuestro crecimiento político en cada uno de ellos. La realidad política social y económica, pero fundamentalmente la realidad interna de nuestra fuerza: la realidad organizativa, la capacidad de diálogo con los sectores sindicales, sociales y productivos; la capacidad y existencia de "liderazgos" capaces de una comunicación fluida con la gente.

En cada escenario, es necesario contrastar esa realidad con la potencialidad real de nuestra fuerza política. Y de ese contraste extraer las conclusiones y proponernos las tareas que nos hagan crecer: Las características sociales, culturales e ideológicas de la población; las necesidades generales pero también las concretas; las carencias pero también las ventajas. Solo a través de ese contraste entre realidad y potencialidad, podremos superarnos. Pero hay que hacerlo desde ya y cotidianamente, en el contacto con la gente.

Políticas de crecimiento

Además de trabajar para lograr los acuerdos y los mecanismos que nos permitan votar juntos a quienes pensamos igual, se hace indispensable seguir creciendo como fuerza política. Teniendo en cuenta los escenarios descritos y el desarrollo de los acontecimientos políticos, sin triunfalismos pero seguros de nuestras fuerzas, debemos apuntar en lo posible a asegurar las mayorías parlamentarias ya desde la primera vuelta electoral. Es un objetivo político que no descarta otras posibilidades, pero de todas maneras se hace imperioso crecer y vamos por buen camino.

Las políticas de crecimiento electoral y político son permanentes. Las elecciones no se ganan solamente por la performance en una campaña electoral, se cimientan en el trabajo político y social de todos los días durante todo el período y se cosechan o no, en las urnas. Es necesario desplegarlos generosamente en todo el país, allí donde fuimos el tercer partido en la votación y aún no somos opción de gobierno, pero también donde gobernamos y contamos con aplastantes mayorías; no se debe confiar en el "crecimiento vegetativo" ni en el "voto castigo" a la crisis derivada de la espantosa acción del gobierno. El único camino es no bajar la guardia y trabajar para crecer.

Espacio 90

Definición

El Espacio 90 se gestó en 1994 como "la confluencia de sectores políticos (Partido Socialista, Corriente Popular, Movimiento Socialista) y de ciudadanos independientes que, manteniendo sus identidades de origen, decidieron conformar un espacio político frenteamplista y progresista con el fin de llevar adelante un proyecto político, económico y social al servicio de las grandes mayorías".

Dicho espacio político se ha expresado en la acción política cotidiana, en la estructura frenteamplista, en la actividad parlamentaria nacional y departamental y en el gobierno de Montevideo, etc. Se ha expresado también electoralmente desde 1994 a la fecha a través de la lista 90. Desde las elecciones internas frenteamplistas de setiembre de 1997, la 90 se convirtió en la primera fuerza política y electoral de la izquierda, cosa que se confirmó con creces en las sucesivas elecciones siguientes de 1999 y 2000.

Responsabilidad política

Es a raíz de estos resultados, de los cuales nos sentimos muy satisfechos, que nuestra responsabilidad política se ha visto acrecentada. Porque somos una parte importante en la conducción de nuestra fuerza política plural y se hace necesario articular políticas con los demás sectores y con el "movimiento" que se expresa a través de su estructura común, con el objetivo de mantener y "timonear" el rumbo estratégico definido por los organismos estatutarios democráticamente elegidos. Porque es necesario respaldar y preservar la figura política del Presidente del FA y del EP, compañero Tabaré Vázquez, líder indiscutido y principal "abanderado" del proyecto político progresista, el que ya contó en noviembre de 1999 con la confianza de un millón de uruguayos y uruguayas y que hoy constituye la principal esperanza de cambio para el país entero.

Es esa responsabilidad acrecentada y determinada por voluntad de los frenteamplistas la que nos impone, al Partido y a nuestro espacio político, un trabajo denodado para llevar adelante las tareas que el EP/FA se defina. Claro que no somos los únicos, pero si en el Frente las tareas no se realizan y los objetivos no se consiguen la principal responsabilidad será nuestra y, nosotros y los frenteamplistas lo sabremos. Sólo si la estructura funciona adecuadamente y los objetivos se alcanzan, la fuerza política avanzará hacia los objetivos y entonces, ganará el país, ganará el Proyecto, ganará el EP/FA y Tabaré Vázquez, pero también y como consecuencia, ganaremos nosotros.

Crecimiento

Toda fuerza política como cualquier organismo vivo tiene necesidad de crecer y desarrollarse. Nuestro espacio político no es una excepción. Nuestro crecimiento electoral a estado indisolublemente ligado al crecimiento de nuestra fuerza política mayor, el Frente Amplio y ahora el Encuentro progresista. Somos la primera fuerza de la izquierda y no queremos dejar de serlo. Pero los hechos han demostrado con creces que hemos actuado sin soberbia, sin procurar "perfilismos", buscando aunar voluntades para la consecución de los objetivos comunes a todos, porque el mejor de los éxitos es el que todos asumen como propio en la medida en que, cada uno a su manera, se siente partícipe del mismo. Así es el Frente Amplio y así se construye una fuerza política pujante y capaz de conducir los destinos del país.

Por otra parte, la existencia de un Espacio Político de mayor amplitud que el Partido, no se contraponen al crecimiento y desarrollo de este sino todo lo contrario. El Desarrollo del EP/FA, el Desarrollo del Espacio 90 y el Desarrollo del Partido actúan en la misma dirección, Si no crece el FA tampoco crecerá el E 90 y, entonces, también al Partido le irá mal.

El espacio 90 debe mantener la coherencia con sus definiciones frenteamplistas, pero debe mantener un diálogo fluido y estrecho con todas las fuerzas progresistas en el plano político y, en el campo electoral, debemos ser pragmáticos y no limitarnos de antemano con definiciones restrictivas. En las pasadas elecciones tuvimos la capacidad captar votos por igual en todos los segmentos de la sociedad fuera cual fuera su corte (por ingresos, por nivel cultural, por oficios, etc.). Esa es la característica básica de los sectores de mayor captación en cualquier Lema y debemos mantenerla.

Tesis 9: Hacia Un Nuevo Internacionalismo

La globalización solo puede ser conducida desde una perspectiva mundial.

Un proyecto progresista nacional para ser viable debe articularse con una estrategia internacional.

Las contradicciones de un mundo globalizado solo pueden ser encaradas mundialmente desde una visión racional, solidaria, colectiva y democrática, vale decir socialista.

Gobernar la globalización desde otras metas y valores, es el camino para avanzar hacia el socialismo del futuro.

Vivimos un tiempo de paradojas, en el cual los maravillosos adelantos tecnológicos, que podrían solucionar los dramas del planeta abriendo horizontes inmensos para la emancipación humana, se han acompañado tanto del crecimiento y la concentración de la riqueza, como del aumento de la exclusión, la pobreza y las desigualdades para inmensas franjas del mundo, y la progresiva y alarmante superación de la capacidad de adaptación o recuperación de los ecosistemas ante el impacto de los efectos de la tecnología, poniendo en riesgo la supervivencia de las generaciones futuras.

Esto es así porque el actual modelo de globalización está conducido por fuerzas y valores que no responden al interés de la humanidad, sino al gran capital financiero transnacional y las grandes corporaciones multinacionales.

La globalización, en tanto expresión del inmenso adelanto de las fuerzas productivas propias de la tercera revolución industrial, no es mala o buena en sí misma, malos o buenos son sus modelos, además ya es la característica definitoria de nuestra época, es un fenómeno irreversible que no puede ser eliminado sino reorientado en base a otros valores, fuerzas e intereses.

La expansión de las fuerzas productivas a nivel mundial- automatización, comunicaciones, biotecnologías, robotización- ha implicado la necesidad de una rápida actualización del capital para recuperar los costos de la revolución científico-tecnológica y por lo tanto de mercados más amplios en permanente expansión para colocar nuevos productos e innovaciones.

Todo esto, junto con la expansión del comercio mundial; la industrialización en países periféricos facilitada por sus menores salarios junto con la desindustrialización en otras áreas del mundo; el flujo de petrodólares fruto de los "boom" petroleros; el desarrollo de la informática y la apertura de los países del Este han contribuido a la globalización.

Se trata de un capital que avanzando en sus procesos de concentración y centralización, opera a la búsqueda de las mejores tasas de ganancia por arriba de fronteras; donde en una suerte de "fábrica global", procesos productivos diversos y en diferentes países confluyen en un producto final. Asociado todo esto al tremendo peso de las empresas transnacionales- las hay que facturan por encima del PBI de algunos países- y bajo la hegemonía del capital financiero que con sus características de movilidad, internacionalización y centralidad, se desplaza por el mundo a golpe de teclado de computadora decidiendo la suerte de naciones enteras. Se ha disociado el asiento del poder político y del poder económico, el primero sobre un territorio determinado y el segundo operando por encima de territorios y de fronteras.

La descolocación física de los centros productivos, pone en duda el territorio de la decisión democrática, disminuye los contenidos materiales sobre los que se decide, devalúa a sus actores e instituciones, al mismo tiempo que plantea el peligro de la confusión y dilución de valores.

Un proyecto progresista, sobre la base de las fronteras de un estado nacional tiene fuertes restricciones en relación a los flujos internacionales del capital -que podrá emigrar buscando menores salarios e impuestos- el acceso a nuevas tecnologías, su inserción en el comercio mundial y el ingreso de divisas, la cuestión medio ambiental, etc.

Es la expresión de la contradicción entre una lógica democrática, basada en las mayorías ciudadanas y una lógica económica que busca incrementar la tasa de ganancia.

El derrumbe del llamado socialismo real se agrega a lo anterior. Es en parte resultado del predominio y la hiper-centralización de los altos estamentos de la burocracia gobernante que a la par que ahogaba la participación y la democracia y explotaba a la población en beneficio propio; podía estimular a las fuerzas productivas en una etapa de industrialización pesada pero las frenaba a la hora de pasar a un modelo propio de la tercera revolución industrial que requiere mayor creatividad e innovación.

Más allá de estas críticas que siempre planteamos los socialistas uruguayos, la caída de estos países, potenció ideológicamente al capitalismo y al neoliberalismo, que pretendieron desacreditar toda intervención estatal en la economía y condujo a un mundo unipolar, perdiendo los países de la periferia un contrapeso a jugar en posibles enfrentamientos con los centros de poder capitalistas.

En este mundo unipolar, asistimos al peso político y militar de los EEUU, pero también a la disputa económica entre los bloques liderados por los propios EEUU, la UE y Japón.

Al mismo tiempo coexisten políticas imperialistas agresivas a expensas de pueblos y naciones con residuos del viejo colonialismo.

Operan otros agentes, las transnacionales, los organismos económicos internacionales, y los bloques regionales, que si bien reducen la soberanía de cada estado miembro, aumentan la capacidad del grupo.

Las sociedades de este mundo globalizado son fragmentarias, complejas, globales y dispersas. La desocupación, es el resultado de los adelantos tecnológicos bajo la lógica del incremento de la ganancia del capital, así como de los procesos de desindustrialización ya comentados y de las aperturas comerciales indiscriminadas, bajo la lógica neoliberal. Disminuye la concentración y el poder de los trabajadores.

Las políticas neoliberales agravan la fragmentación, la desarticulación, la exclusión y la marginación. Es la sociedad de los dos tercios, con el sentimiento creciente de inseguridad. Se han producido importantes cambios sociales, entra en crisis el proletariado tradicional, así como las capas medias vinculadas al estado, aparecen otros sectores vinculados al mercado o a los servicios. El modelo de acumulación pautado por la globalización conducida por el esquema neoliberal, afecta también a sectores de la burguesía industrial o agraria que no soportan la competencia en un mercado mundial, lo cual hace posibles nuevas alianzas sociales. Los trabajadores, las capas medias, incluyendo a los nuevos sectores surgidos. En estos años, los desocupados, marginados, los sectores del empresariado afectados por el modelo, pueden cuajar en cada sociedad nacional, un bloque alternativo, con una propuesta de desarrollo que no puede ser el resultado de la suma de demandas sectoriales sino que implica la articulación desde la política, que cobra así potencialmente una mayor trascendencia...

Es una sociedad mucho más opaca, es más difícil una política de síntesis para articular lo social y lo político, los electorados son más heterogéneos y es más trabajoso convocarlos con los recursos habituales de sindicatos y partidos.

La participación ciudadana entra en retracción en todas partes -en lo que también

inciden el papel predominante de los medios de comunicación centrados en la imagen -, aparecen fenómenos de neocorporativismo y correlativamente crece la política desde lo cercano, lo local y los espacios de la descentralización como alternativas que pueden implicar el reingreso de los ciudadanos a la dimensión política.

Otra paradoja, es que a diferencia de tantos otros tiempos "fronterizos" de la historia, el actual no se acompaña de una verdadera revolución en las ideas, la impresionante revolución tecnológica, tiene su correlato a nivel ideológico con la pobreza teórica del pensamiento neoliberal, justificación del actual modelo de acumulación mundial y de los intereses que en él predominan.

Pobreza teórica que no va más allá de exaltar al mercado, como nuevo casino mundial, donde, como en todos los casinos algunos ganan y muchos pierden.

O en preconizar la renuncia a la construcción deliberada del futuro y la renuncia a las ideologías, dejando así un vacío de sentidos para la vida humana. Pero las ideologías viven, las que murieron o están muriendo vencidas por la historia son las ortodoxias, que son cosas diferentes. Y en el caso de las corrientes teóricas progresistas, la ideología no solamente vive, sino que además tiene el sentido de los valores y de los proyectos que impulsan para transformar una realidad que las necesita como el navegante necesita la brújula.

El panorama mundial exige a los socialistas de todo el orbe replantear el compromiso de no resignarnos a la incertidumbre, de ser forjadores y protagonistas del destino de la humanidad.

Porque tal es la esencia actual de ser socialista: ser siempre críticos y no resignarnos ante la realidad y transformarla avanzando hacia la síntesis de los valores de la libertad y la igualdad tomando al mundo como horizonte.

Esto nos enfrenta al gran desafío para la humanidad en el siglo que comienza: gobernar la globalización con sentido de progreso humano, pilotear el desarrollo de las fuerzas productivas planetarias como un objetivo capaz de hacer realidad las expectativas de vida digna que históricamente han movilizad o a los pueblos.

En este panorama, un proyecto progresista nacional para ser viable debe articularse con una estrategia internacional, que incluya el respaldo activo de los progresistas de todo el mundo. Esta estrategia implica diferentes niveles.

A nivel nacional, la consolidación de un bloque alternativo con una propuesta de desarrollo que contemple el interés de las mayorías y que se acompañe de acuerdos sociales y políticos en torno a esa propuesta.

A nivel regional, acuerdos y negociación conjunta para forjar un espacio mayor para defender el interés nacional y a la vez negociar con el mundo.

Alternativas a nivel internacional, hacia una nueva institucionalidad mundial y democrática, forjadas desde múltiples niveles. Las negociaciones y acuerdos tejidos desde los organismos de integración regional, con los otros bloques del mundo, la acción en los organismos políticos y económicos internacionales, en las organizaciones y foros como la Internacional Socialista o el Foro de San Pablo y en las organizaciones de la sociedad civil mundial como las que reclaman la tasa Tobin o se expresan en el Foro Social Mundial.

La meta es gobernar la globalización con sentido humano. Esto implica la construcción de una gobernabilidad de múltiples niveles superpuestos, desde el global hasta el municipal y local. No debe haber ámbito público de decisión exento de marco democrático. Para los socialistas la globalización, también ha de ser gobernada democráticamente, para lo cual es necesario un internacionalismo de nuevo tipo.

Algunas claves del mismo son:

- la paz, la libertad, la democracia, la igualdad la justicia , la solidaridad, la lucha contra todas las desigualdades incluyendo las de raza o género, y la vigencia universal de los DDHH son nuestros valores rectores. No son nuevos, pero hasta ahora han resultado insuperados y tal vez sean insuperables.

- equilibrio entre supranacionalidad y soberanía. Esto implica articular la defensa de nuestra soberanía con el diseño de instituciones supranacionales como la Corte Penal Internacional. También se trata de la actuación en el interior de los organismos internacionales -ONU, OEA, BM, FMI, OIT, OMC, etc.- en acuerdo con otras fuerzas progresistas para modificar la relación de fuerzas en el seno de ellas y contribuir a avanzar hacia una institucionalidad mundial y democrática capaz de hacer posible el gobierno de la globalización.

- restablecer el multilateralismo a nivel internacional y al mismo tiempo reivindicar los procesos de integración regional.

- integración sobre bases de desarrollo económico y social, no es posible un auténtico desarrollo económico sobre bases de pobreza o marginación, sin educación, sin políticas que alienten la producción, los servicios y el empleo, sin un adecuado equilibrio entre el estado y el mercado, sin estabilidad no sólo en las cuentas bancarias sino también en la vida de la gente y en las instituciones democráticas.

- gobierno económico de la globalización , hacia un Nuevo Orden Económico Internacional, apuntando a una lógica de mayor igualdad y al desarrollo sustentable y respetuoso del medio ambiente a nivel mundial

- esto implica reglas para la globalización, en relación al flujo de capitales financieros(tasa Tobin, por ej.), a los derechos laborales, el comercio, el medio ambiente, etc. y actuar en los organismos internacionales buscando consensos para tales reglas

- la importancia de la sociedad civil, la ampliación de la ciudadanía y la jerarquización de los gobiernos locales.

El fortalecimiento del MERCOSUR, su ampliación hacia América Latina y los acuerdos que pueda establecer con el resto del mundo, parecen el camino indicado.

Lo primero -y el objetivo que procuramos defender- es el fortalecimiento de nuestra comunidad nacional. Lo segundo, el fortalecimiento del bloque regional. Sobre esa base, y sobre la afirmación nacional y regional, negociar con el resto del mundo (U.E., NAFTA, países asiáticos, etc.) sin estar atado a ningún interés que no sea el propio...En una lógica en la que cada uno busca defender lo suyo, tener en cuenta las contradicciones de los otros actores.

Afirmando lo anterior como punto de partida, parecen potencialmente más fecundos los acuerdos con la U.E., sobre la base de las cercanías culturales, una mayor sensibilidad ante la cuestión social, la realidad de los intercambios actuales y la necesidad compartida de buscar un contrapeso a la influencia de los EEUU . No obstante, es importante tener en cuenta la alianza militar entre los principales países de la UE y los EEUU (la OTAN), que parece estar en un nivel superior a los acuerdos económicos y que condiciona el marco dentro del cual la UE puede equilibrar su relación económica con los EEUU.

El MERCOSUR debe consolidar sus instituciones y dotarse de reglas que amparen a sus socios menores, instituir un Tribunal Arbitral para la resolución de conflictos, crear instituciones supranacionales -incluyendo un parlamento electo por voto popular, afirmando así la ciudadanía mercosureña- extender un arancel externo común, coordinar las políticas macroeconómicas -cambiarias, monetarias, etc.- entre sus miembros. Crear mecanismos compensatorios, para ciertos casos en que las

resoluciones del conjunto, castiguen sobre todo a los socios más vulnerables, como existen en la UE.

Buscar la complementación de la producción de los socios articulando las exportaciones del bloque.

Profundizar la dimensión social y los derechos laborales.

En lo que respecta las relaciones entre el MERCOSUR y la UE, a la solidez de los lazos históricos y culturales que unen a las dos regiones, se agrega que para el MERCOSUR, la UE es su principal socio comercial y para la UE, el MERCOSUR es un mercado creciente para sus exportaciones.

El obstáculo radica en la denominada Política Agrícola Común, la cual no sólo ha sido la fuente de fricciones entre Europa y el resto del mundo, sino que se ha revelado portadora de ineficiencias en relación a sus fines originarios y de costos crecientes para los ciudadanos europeos, así como origen de prácticas fraudulentas y de altísimos costos administrativos.

En tal sentido, la modificación de la PAC, mejoraría las posibilidades nuestras y favorecería también a los contribuyentes y consumidores europeos.

La asociación entre ambos bloques, planteada en el Acuerdo Marco firmado en Madrid en 1995, constituiría un importante estímulo para las exportaciones mutuas y para las corrientes de inversión.

Al mismo tiempo, los avances de EEUU hacia el ALCA y la experiencia de la UE con México, donde perdió presencia política y económica, significan un riesgo para Europa, lo cual pueden facilitar acuerdos con este bloque.

Desde la perspectiva de un bloque regional cohesionado y ampliado desde Venezuela y el grupo andino y el resto de América latina después debe encararse también la negociación comercial con los EEUU.

Si el ALCA significa una relación bilateral ,una apertura sin garantías entre economías débiles por separado y la primera potencia del mundo, será una aplanadora que nos aplastará a todos. Por el contrario, un bloque regional fortalecido, de conjunto podrá ensayar otras alternativas de relación comercial con dicho país.

En relación a estas complejas y variadas temáticas, conviene resaltar algunas claves: respecto a los procesos de integración:

- el carácter sustancialmente político de los procesos de integración regional e interregional. No serán la emanación espontánea de un mercado omnipotente, como el que inventan los neoliberales. Es necesaria la voluntad política y aquí como siempre hay que tener en cuenta a la economía pero darle la prioridad a la política y a la democracia como construcción deliberada del futuro. Esto se vincula a las reglas para la globalización , mencionas antes, reglas también para la relación entre países y bloques.

- es posible otra integración, regional e interregional: con valores de progreso, con protagonismo de la sociedad civil, con relaciones comerciales justas, con negocios limpios.

- la dimensión cultural deberá ser preservada y la dimensión ideológica deberá ser tenida en cuenta, sobre todo en relación a los medios de comunicación

- en ese marco se destaca la ampliación de la ciudadanía y los gobiernos locales.

- la dimensión social de la integración y el reconocimiento de la sociedad civil mundial, nos conduce a otras problemáticas: los movimientos sociales que expresan

demandas y protestas contra el modelo de globalización imperante (o sus expresiones internacionales como el Foro Social Mundial), tanto desde la perspectiva de cada país como de la sociedad civil global y su relación con los partidos políticos progresistas o con organizaciones como la Internacional Socialista. Admitiendo las contradicciones -los agricultores europeos participan de tales foros y exigen mantener la política agrícola común, por ejemplo- y reconociendo la dificultad de articular intereses contrapuestos a la escala del mundo, vemos que al mismo tiempo que no hay un esquema preestablecido, no podemos renunciar al camino lento y laborioso que desde la articulación, el diálogo y la política, permitirá construir a nivel mundial nuevos consensos y nuevas reglas hacia una globalización diferente.

- Gobernar la globalización con otras metas y valores es el camino internacionalista para avanzar hacia el socialismo del futuro. La globalización sólo puede ser conducida desde una perspectiva mundial, un proyecto progresista nacional sólo puede ser viable desde la perspectiva internacional y a su vez las contradicciones de un mundo globalizado sólo pueden ser encaradas mundialmente desde una perspectiva racional, solidaria colectiva y democrática, vale decir socialista.

- por último, la necesidad de consolidar a la familia progresista en el MERCOSUR y sistematizar las relaciones de ésta con el Partido Socialista Europeo. Debemos crear el Partido Progresista del MERCOSUR. También debemos instituir la ciudadanía Mercosureña y el parlamento del MERCOSUR electo por voto popular...

Una estrategia tendiente al mismo tiempo a hacer viable un proyecto progresista nacional y a avanzar hacia una nueva sociedad mundial a partir de las condiciones reales que existen en esta globalización supone actuar a múltiples niveles, como dijimos más arriba: acceder al gobierno, un acuerdo social en torno a otro proyecto de desarrollo, avanzar en la integración, profundización y ampliación regional, los acuerdos interregionales, la acción coordinada de las fuerzas progresistas en los organismos internacionales, la acción en los movimientos sociales mundiales y la presencia en las coordinaciones políticas regionales y mundiales de signo progresista.

La coordinación de las fuerzas progresistas latinoamericanas implica la acción en ámbitos como el Foro de San Pablo, el Comité para AL de la IS, la Coordinación Socialista latinoamericana y el Parlatino. Al mismo tiempo, a nivel mundial jerarquizamos a la Internacional Socialista como único ámbito de alcance universal de fuerzas que reivindican una alternativa progresista al pensamiento neoliberal.

Más allá de la heterogeneidad ideológica de las fuerzas que integran el FSP, el mismo ha tenido un proceso positivo de confluencia latinoamericana de posiciones programáticas alternativas al neoliberalismo, con bases democráticas y apostando a la unidad de las izquierdas en cada país.

Nuestra apuesta a la integración regional y latinoamericana nos lleva a privilegiar dichos ámbitos, pero no a limitarnos a ellos. Debemos actuar en el Comité AL de la IS, darle peso propio para incidir en la propia IS y convertirlo en un útil ámbito de intercambio de acuerdos programáticos. Debemos buscar que las dos organizaciones (IS y FSP) se complementen y no compitan.

La CSL por ahora debe ser un espacio de comunicación en tales ámbitos.

Con los partidos de la IS compartimos la afirmación de la democracia como valor irrenunciable, como un medio y un fin, aunque no todas sus fuerzas mantienen la perspectiva de la superación del capitalismo como nuestro partido.

Importa impulsar la presencia latinoamericana en ella y al mismo tiempo reafirmar la participación del PS del Uruguay, que ya ha recuperado un sitio respetado y escuchado en dicha organización. Los lazos históricos, culturales e ideológicos con algunos de sus partidos (Francia, España, Cataluña, Italia, Alemania, Suecia, etc.) deben ser promovidos en la perspectiva del respaldo a un gobierno progresista en el país y las relaciones MERCOSUR-UE, así como en el ámbito de la cooperación y del

intercambio y la elaboración común programática e ideológica. También debemos buscar la relación con partidos del área africana.

Importa también impulsar nuestra participación en los movimientos sociales mundiales como el, Foro Social Mundial o ATTAC, -impulsores de la tasa Tobin, donde somos a la fecha el único partido uruguayo que adhirió a dicha organización- u otros, llevando a ellos las posiciones del partido o las que podamos coordinar con otros actores y enriqueciendo al partido con sus debates y apuntando a la perspectiva de articular y no oponer a las fuerzas políticas y sociales que apuntan a gobernar la globalización con un sentido progresista, clave en última instancia para avanzar hacia el socialismo del SXXI.

Por último, en este comienzo tan convulsionado del nuevo milenio es necesario más que nunca reafirmar nuestra inequívoca condena al terrorismo, nuestra apuesta por la paz mundial y la vigencia del derecho internacional y nuestro rechazo a toda forma de chantaje o visión en blanco y negro, que obligue a optar entre el terrorismo u otorgar un cheque en blanco a las políticas militares de los Estados Unidos.

Tesis 10: El socialismo del siglo XXI

El socialismo del futuro será democrático y planetario.

Socialismo y democracia son inseparables.

Avanzar hacia el socialismo implica un largo trayecto histórico de construcción permanente en el sentido de la democratización profunda de la economía y de la sociedad.

La democracia sobre nuevas bases es la vía democrática al socialismo en el Uruguay.

Ganar las elecciones con el EPFA es un paso fundamental en el proceso de construcción del socialismo.

Superar y vencer el desafío que significa la ofensiva ideológica del neoliberalismo, implica afirmar nuestras alternativas no sólo programáticas, sino también ideológicas, entendiendo en este caso por ideología el gran marco teórico y de principios que enmarca y da sentido a la acción política y que apunta a las utopías, como aquellos proyectos ideales que significan un horizonte futuro hacia el cual avanzamos... Se trata, en este siglo XXI, de elaborar proyectos realistas que nos acerquen a las utopías y de elaborarlas partiendo de la incertidumbre. Pero no ha cambiado el objetivo: una sociedad más justa y humana. Estamos convencidos que el futuro no está predeterminado y será el resultado dialéctico de la acción colectiva de hombres y mujeres frente a la realidad material, social y cultural controlada por sectores que no están dispuestos a ceder su posición dominante. Partiendo de que ya no hay verdades predeterminadas que estén marcando el camino en forma ineluctable. Y de que el futuro será el resultado del esfuerzo colectivo de los hombres.

Ante la ofensiva neoliberal, que exalta el determinismo de las leyes del mercado, se trata de reivindicar a la libertad, a la política y a la democracia, en tanto apuntan a la construcción colectiva y deliberada del futuro por parte de los hombres en base a sus propias elecciones.

Lo que significa que siempre hay alternativas, siempre hay opciones de derecha o de izquierda.

Es en este marco que queremos afirmar al socialismo, tomando como punto de partida las grandes mutaciones de las tres últimas décadas del siglo pasado.

Hay cuatro grandes elementos que hay que destacar: la revolución científica tecnológica, la globalización, la ofensiva neoliberal con sus impactos en las sociedades y la caída del socialismo real.

En relación a los tres primeros aspectos, hay que agregar a lo dicho en la tesis anterior, que la fragmentación de las sociedades, la disminución de las grandes concentraciones de trabajadores, su sustitución por menores unidades productivas unidas por las redes informáticas, los procesos de desindustrialización, la complejidad social, con grandes masas de excluidos y desocupados, cuentapropistas, pequeños propietarios e informales, la fragmentación también a nivel del empresariado con sectores dispares que se benefician o que entran en crisis con el modelo de acumulación de la globalización vigente. hace más difíciles las políticas de síntesis y también la labor de las fuerzas alternativas, partidos y sindicatos.

A quiénes representan. Cómo los representan? Junto a esto aparecen fenómenos corporativos. a todo nivel.

Lo que no niega que la explotación, el valor y la plusvalía se siguen generando y el trabajo sigue siendo la fuente de los bienes materiales de la humanidad, sostenemos que la división de la sociedad en clases obliga a quienes quieren cambiarla, a organizarse en partido político.

La clase trabajadora ha perdido peso y está dispersa, el pasaje de clase en sí a clase para sí más que nunca no puede ser el reflejo espontáneo de la vida económica.

Sigue siendo para nosotros clase universal ,en el sentido de Marx y Gramsci, o sea clase portadora de un proyecto que si es consensuado o sea aceptado por la mayoría de la sociedad permite a ésta avanzar hacia la superación de sus contradicciones, lo que implica trascender todo corporativismo.

Sobre la base de la realidad material y social, la clase trabajadora y más allá de ésta el bloque alternativo al modelo de acumulación neoliberal -más amplio que aquélla pero incluyéndola como componente esencial- deben reconstruirse y construirse desde la acción el discurso y la propuesta política.

En relación a la caída del socialismo real también tratada en la tesis anterior, la misma deja varias lecciones: Si se sacrifica la libertad y la democracia en aras de la igualdad también se pierde a la igualdad, porque la burocracia del estado-partido, explota a la población en beneficio propio, implantándose otro esquema de clases.

Fracasa también un modelo donde el estado era el único agente económico, donde el mercado desaparecía y donde la planificación pretendía ser total. Si bien esto nunca fue total, la hipercentralización que favoreció las primeras etapas de industrialización pesada , ahogó las fuerzas productivas en el pasaje a la tercera revolución industrial que requiere creatividad e innovación.

Y fracasa también una ideología cargada de determinismos -una lectura caricaturesca y deformada del marxismo- que, justificando el dominio de la nomenclatura, creía prever el rumbo de la historia, de la acción consciente de los hombres y las mujeres sobre la realidad para construir su destino.

Todo esto favorece la ofensiva neoliberal, que desacredita toda intervención estatal en la economía y que en sus efectos concretos agrava la desarticulación social, lo cual agrega dificultades a las propuestas socialistas.

Este es un mundo que comienza el siglo plagado de contradicciones. La desocupación como fenómeno mundial- consecuencia del progreso tecnológico bajo la lógica del incremento de la tasa de ganancia de los capitalistas- el crecimiento de la marginación y exclusión en todo el mundo (en el N ,donde disponen de otros sistemas de protección), las migraciones masivas, la aceleración del deterioro

ambiental, los rápidos movimientos de capital financiero en procura de lucro, las asimetrías comerciales, la agravación de la brecha entre el N y el S, el hambre y las enfermedades en zonas inmensas del mundo, el crecimiento de la pobreza y a la vez la concentración y la centralidad del capital.

La lógica del lucro entra en contradicción con una lógica democrática, con el interés de la humanidad.

Estas contradicciones por su sola evolución no llevan al socialismo, llevarían a la humanidad al caos y a la barbarie si no entra a primar otra lógica que apunte a soluciones colectivas, solidarias, democráticas y racionales, vale decir socialistas, como fruto de la acción voluntaria y consciente aplicada a la escala del mundo.

Coexisten circunstancias que hacen más difícil y a la vez más necesario al socialismo.

El mundo requiere soluciones socialistas para salvarse del retroceso de la civilización y el caos. Este es el gran desafío que el SXXI. presenta a los socialistas. Gobernar el mundo y la globalización para continuar construyendo el socialismo del futuro.

No sólo por lo anterior elegimos al socialismo, también por una opción ética y valorativa, porque entendemos que es el marco para el desarrollo del ser humano y su individualidad, de un verdadero humanismo, que no ignora al proyecto individual, la libertad del ser humano concreto, sino que la integra y la realiza en un proyecto de horizonte social y colectivo. En tal sentido, la afirmación del valor supremo de la dignidad de la persona nos lleva a postular a los derechos humanos como los principios esenciales para una sociedad democrática y socialista.

Los derechos políticos, los derechos inherentes a la dignidad humana siempre deben ser preservados en su integridad. Los derechos económicos, son regulados por la voluntad democrática de la sociedad a fin de hacer efectivos los derechos sociales, que hacen posibles las condiciones materiales de la vida de las personas y que no pueden ser mercancías sometidas al azar, el mercado o la herencia (salud, vivienda, alimentación, educación, seguridad social, etc).

Partimos de una concepción de la libertad que va más allá del irrenunciable respeto a los derechos humanos y a la libertad política. Las personas necesitan contar con recursos y posibilidades para poder decidir su futuro y disfrutar de libertad real para llevar a cabo su proyecto personal en el marco de un proyecto colectivo que consolida una sociedad democrática, tolerante y solidaria.

Esto implica extender los derechos a los ámbitos económicos, sociales y culturales, asegurar las necesidades básicas, sin las cuales no hay verdadera libertad de opción para participar como ciudadanos en las decisiones colectivas, así como integrar armónicamente las sociedades humanas con el medio ambiente, en la medida que formamos parte del ecosistema global sin el cual no es posible la vida.

Y facilitar el acceso de todos a la educación, la formación e información en una sociedad en la que el conocimiento es un bien esencial para la integración social, que deberá tender a socializarse cambiando el carácter de mercancía que el sistema pretende asignarle.

Para informarse y deliberar, para participar y asumir los asuntos públicos como cuestión propia, para desarrollar una verdadera democracia cívica, para que no impere el dominio de los poderes económicos fácticos y no democráticos, para que no se instale una burbuja virtual entre la realidad y los ciudadanos que banalice la política en un espectáculo mediático, se requieren medios de información objetivos y honestos, sin que sus propietarios -el estado o particulares- los pongan al servicio de intereses sectoriales, así como el acceso democrático e igualitario a los mismos.

Los nuevos medios -internet- presentan riesgos pero también oportunidades para establecer mecanismos que propicien la participación directa y activa de los

ciudadanos. En la misma línea de vigencia de derechos y libertades incluimos la lucha contra las desigualdades de género y la afirmación del pluralismo como el derecho a la diferencia de ideas, comportamientos, elecciones sexuales, junto con el valor de la igualdad ante la vida y la defensa de los derechos culturales y del patrimonio cultural.

Si nos acercamos a formular la idea de socialismo, después de esta reafirmación de los derechos y libertades, lo primero es expresar que seguimos manteniendo la utopía de una sociedad en la que se superan las clases y las desigualdades sociales, donde se llegue a la síntesis de la libertad y la igualdad, a la socialización de las fuerzas productivas y a la superación de la propiedad privada de los grandes medios de producción.

La utopía como el gran proyecto histórico, junto con la realización de los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y el desarrollo de la individualidad humana.

La realización de este proyecto va a llevar un largo trayecto histórico, va a tener que ser realizado a la escala del mundo, va a requerir un inmenso proceso de transformación de los hombres y tendrá que ser construido en una lógica democrática.

Se podrá avanzar hacia un horizonte en base a estos valores y utopías solamente si conseguimos el respaldo creciente de la ciudadanía en nuestro país y en otros países donde las fuerzas socialistas consigan el respaldo de la ciudadanía, con la posibilidad de la alternancia de partidos en el gobierno y por tanto del retroceso en ese proceso.

Es un trayecto que no está predeterminado, cuya marcha depende de muchos actores, de la voluntad ciudadana, de la coyuntura internacional y esto a su vez hay que verlo a la escala del mundo.

Avanzar hacia ese horizonte de sentidos por la vía democrática al socialismo, implica un largo trayecto histórico, donde se trata de ir consolidando mayorías en cada país, y en definitiva mayorías también a nivel del mundo.

Concebimos al socialismo, como dice nuestra declaración de principios, como la profundización permanente de la democracia en el sentido político, económico y social.

Como un proceso de democratización profundo y radical que parte de la política y llega hasta la vida económica y social.

El socialismo es avanzar con la democracia desde la política hacia la economía y la sociedad, de tal manera que las opciones libres y voluntarias, expresadas en los procedimientos democráticos, no se limiten a los aspectos políticos de la marcha de la sociedad, sino que en definitiva decidan en cada caso cuanto habrá de propiedad privada, qué extensión tendrá el mercado, cuál es el destino del excedente económico y como se organiza la vida económica de la sociedad.

En este proceso de aproximaciones sucesivas, proceso y resultado a la vez que es el socialismo, coexisten diferentes áreas de propiedad: hay un área de propiedad estatal porque aspectos básicos de la economía deben quedar bajo el control del estado democrático, hay un área de propiedad social autogestionada, hay un área de propiedad privada y también siguen operando en un mundo globalizado las empresas transnacionales. La complejidad de las sociedades, la coexistencia de diferentes formas de propiedad, la existencia del mercado como institución al servicio de la eficiencia productiva y de la competitividad, resaltan la importancia del estado democrático como centro coordinador y programador del desarrollo.

Socializar las fuerzas productivas es un proyecto a realizar en un prolongado proceso histórico en el cual la soberanía popular y la democracia se extienden al conjunto de la vida económica.

No hay un modelo acabado de socialismo, el mismo no está predeterminado entre otras cosas porque nunca hubo una sociedad socialista, existieron intentos de construir el socialismo. Podemos sí plantear un modelo de gestión que esté basado en esos principios de una gestión colectiva, solidaria, racional y democrática.

En tal sentido, importan los medios y los fines. Los fines, la utopía y los valores le dan sentido al proceso y los medios, que deben estar de acuerdo con los fines porque si no se desvirtúa el proceso, deben ser articulados en un proceso de invención permanente con aquellos. Esta articulación es la que hace avanzar a la sociedad hacia ese horizonte teniendo en cuenta el consenso democrático obtenido y la evaluación de la realidad y de la correlación de fuerzas a favor y en contra de las transformaciones a nivel nacional, regional y mundial, ya que los poderes económicos dominantes ejercerán su resistencia contra este proceso.

El primer paso para comenzar a recorrer este proceso es ganar las elecciones, derrotar a la derecha neoliberal y acceder al poder del estado. con el EPFA y eventualmente con las alianzas que nos permitan cuajar un gobierno de mayorías nacionales, expresando a un amplio bloque social alternativo al neoliberalismo y que asuma un proyecto progresista, combatiendo la pobreza, expandiendo las políticas sociales con un sentido de justicia, modernizando el país para alentar su desarrollo productivo, defendiendo el trabajo y el consumo de los uruguayos y llevando a cabo una serie de reformas en planos esenciales (salud, educación, política fiscal, etc). Al mismo tiempo desplegar la estrategia internacional ya comentada y consolidar la unidad expresada en el E90, el FA, el EP y otras alianzas que puedan forjarse.

La concreción de este proyecto progresista es un objetivo compartido con todas las fuerzas que adhieran al mismo. Cumplir con él cabal y lealmente es además para nosotros el primer paso para seguir avanzando y si logramos el acuerdo de las mayorías en sucesivos pronunciamientos electorales y vencemos las resistencias de los poderes económicos y políticos afectados, profundizaremos las transformaciones, hacia un rumbo socialista, mediante la democratización de la vida social y la transferencia de poder a la sociedad.

En todo se jerarquiza el papel del Partido Socialista, partido que se define como partido de los trabajadores que son la mayoría del país, pero que se abre a todos los ciudadanos que se identifiquen con los ideales socialistas, como dice nuestra declaración de Principios.

Partido que queremos que sea abierto y transparente ante la sociedad, responsable ante sus miembros y ante los ciudadanos, receptores de sus aspiraciones, concededores de sus necesidades.

Partido que reafirma en el Siglo XXI la identidad de ser socialistas, como el rechazo a aceptar un mundo plagado de injusticias, como la búsqueda permanente de horizontes futuros en el sentido de la síntesis de la libertad y la igualdad y como la lucha, la reflexión y la acción a la medida del mundo.